

NOVIEMBRE 6 DE 1911

57.^a REUNION. 4.^a SESION DE PRÓRROGA

PRESIDENCIA DEL DR. ELISEO CANTON

Diputados presentes: Acosta, Agote, Anchorena, Avellaneda, Ayarragaray, del Barco, Beltrán, Bouquet, Bréard, Calderón, Calvo, Cárcano, Carlés (C.), Carlés (M.), Castañeda Vega, Castex, Cernadas, Cordero, Costa, Cronzeilles, Day, Echagüe, Escobar, Estrada, Etcheecopar, Etcheverry, Ferrer, Fonrouge, Fraga, Frías, Galigniana Segura, Gallo, García González, García Vieyra, Goenaga, González Bonorino, Guevara, Hernández, Lacasa, Lavié, Lezica, López (P. C.), López Mañán, Loza, Luro (P. O.), Luro (S.), Llobét, Méndez Casariego, Meyer Pellegrini, Montes de Oca, Moreno, Moyano (R.), Mugica, Olivera (B.), Olivera (G. P.), Olmedo, Padilla (E. E.), Padilla (M. M.), Parera (F. M.), Paz (A. C.), Penna, Peña, Pera, Pérez Virasoro, Pinedo, Roca, Rodríguez Jurado, Ruiz Moreno, Santamarina, Sosa Carreras, Varela, Vega, Vernazza, Vocos Giménez, Zambrano.—**Ausentes con licencia:** Bengolea, Candiotti, Gómez, Gonnet, López (M. E.), Ortiz.—**Con aviso:** Alsina, Bejarano, Bonifacio, Carranza, Conforti, Freyre, Garrido, Iriondo, Iturbe, Lassaga, Leiva, Lubari, Maza, Molina (E.), Molina (M.), Oliver, Parera (R. A.), Paz (M.), Saavedra Lamas, Serrey, Tenreiro.—**Sin aviso:** Alvarez (A.), Alvarez (J. M.), Arias, Correa, García, Guasch Leguizamón, Moyano (F. J.), Pinasco, Revilla, Rivas, Terán, de la Vega, Vergara.

SUMARIO N.º 57

1

Aprobación del acta de la sesión anterior.

2

Crédito suplementario por 308.704 pesos al ministerio de marina para refuerzo de su presupuesto.

3

Nombramiento de una comisión especial para el estudio de la cuestión de límites en el delta del Paraná, entre las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.

4

Consideración del despacho de la comisión de negocios constitucionales en el proyecto de **reforma de la ley electoral**.

—En Buenos Aires, á 6 de noviembre de 1911, el señor presidente declara abierta la sesión, á las 4 y 25 p. m.

1

ACTA

—Se aprueba el acta de la sesión anterior.

2

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

MINISTERIO DE MARINA

Buenos Aires, octubre 31 de 1911.

Al honorable Congreso de la Nación:

El Poder ejecutivo tiene el honor de dirigirse á vuestra honorabilidad acompañando el adjunto proyecto de ley, por el cual se abre un crédito

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de diputados, etc.

TITULO PRIMERO

De la calidad, derechos y deberes del elector

CAPITULO I

DE LOS ELECTORES

Artículo 1.º Son electores nacionales, los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los diez y ocho años cumplidos de edad, siempre que estén inscriptos unos y otros en el padrón electoral.

Art. 2.º Están excluidos del padrón electoral:

1.º—Por razón de incapacidad:

- a) Los dementes declarados en juicio;
- b) Los sordo-mudos que no sepan hacerse entender por escrito;

2.º—Por razón de su estado y condición:

- a) Los eclesiásticos regulares;
- b) Los soldados, cabos y sargentos de la tropa de línea y armada y agentes ó gendarmes de policía;
- c) Los detenidos por juez competente, mientras no recuperen su libertad;
- d) Los dementes y mendigos, mientras estén reclusos en asilos públicos, y en general, todos los que se hallen aislados en hospicios públicos ó estén habitualmente á cargo de congregaciones de caridad.

3.º—Por razón de indignidad:

- a) Los condenados por sentencia ó pena de presidio ó penitenciaría;
- b) Los reincidentes y los condenados por delito contra la propiedad, durante cinco años;
- c) Los penados por falso testimonio ó por delitos electorales durante cinco años;
- d) Los que hubieran sido declarados, por autoridad competente, incapaces de desempeñar funciones políticas;
- e) Los quebrados fraudulentos, hasta su rehabilitación;
- f) Los que hubiesen sido privados de la tutela ó curatela, por defraudación de los bienes del menor ó del incapaz, mientras no restituyan lo adeudado;
- g) Todos aquellos que se hallen bajo la vigencia de una pena temporal, hasta que ésta sea cumplida;
- h) Los que hubiesen eludido las leyes sobre el servicio militar, hasta que hayan cumplido la pena que les corresponde;

- i) Los que hubiesen sido excluidos del ejército con pena de degradación ó por deserción, hasta diez años después de la condena;
- j) Los deudores por malversación ó defraudación de caudales públicos, mientras no satisfagan su deuda;
- k) Los dueños y gerentes de prostíbulos.

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS DEL ELECTOR

Art. 3.º Ninguna autoridad podrá reducir á prisión al ciudadano elector durante las horas de la elección, salvo el caso de flagrante delito, ó cuando existiera orden emanada de autoridad competente. Fuera de este caso, no podrá estorbársele el tránsito de su domicilio al lugar de la elección, ó molestársele en el desempeño de sus funciones.

Art. 4.º La persona que se hallase bajo la dependencia legal de otra, tendrá derecho á ser amparada para dar su voto, recurriendo al efecto á los magistrados á que se refiere el artículo 89, ó á falta de éstos, al presidente del comicio, en la mesa donde le corresponda votar.

Art. 5.º El sufragio es individual y ninguna autoridad, ni persona, ni corporación, ni partido, ó agrupación política, puede obligar al elector á votar en grupos de cualquier naturaleza ó denominación que sea.

CAPITULO III

DE LOS DEBERES DEL ELECTOR

Art. 6.º Todo elector tiene la obligación de votar en cuantas elecciones nacionales fueren convocadas en su distrito.

Art. 7.º Quedan exentos de esta obligación:

- 1.º Los electores mayores de setenta años;
- 2.º Los jueces y sus auxiliares que, por disposición de esta ley, deben asistir á sus oficinas y tenerlas abiertas durante las horas de la elección;
- 3.º Previa declaración judicial los enfermos crónicos ó permanentemente incapaces para trasladarse al lugar del comicio.

Art. 8.º Las funciones que esta ley atribuya á los encargados de darle cumplimiento, son irrenunciabiles.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO UNICO

DE LA PROCLAMACION DE CANDIDATOS

Art. 9.º Los ciudadanos públicamente proclamados candidatos pueden dirigirse á los presidentes de los comicios, del distrito electoral donde quieran hacerse elegir, nombrando apoderados

que los representen ante las mesas. Siempre que varios candidatos hayan sido proclamados en una sola lista deberán nombrar por mayoría un solo apoderado por cada mesa.

Estos apoderados no tienen otra misión que la de fiscalizar, en conformidad con esta ley, las operaciones del acto electoral.

Art. 10. Desde ocho días antes del fijado para dicho acto, los candidatos pueden remitir á los presidentes de comicio, las procuraciones nombrando apoderados ante la mesa respectiva.

Estas procuraciones serán hechas en papel común y bajo la ó las firmas del ó de los interesados, y deberán precisamente tener en electores en ejercicio, pertenecientes al colegio electoral donde corresponda la mesa cerca de la cual están acreditados, y que sepan leer y escribir.

Art. 11. Los candidatos serán personal y solidariamente responsables de las impugnaciones hechas por sus apoderados contra algún elector, si después resultasen reconocidas falsas por las juntas de escrutinio.

Esta responsabilidad sólo se hará efectiva contra los candidatos que hayan concurrido á la designación del apoderado culpable.

TITULO TERCERO

De las elecciones parlamentarias y presidenciales

CAPITULO I

DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS

Art. 12. Las elecciones de diputados al congreso, tendrán lugar el último domingo de marzo, en todos los años de número par. Las elecciones extraordinarias que ocurran por vacante, dentro de los períodos ordinarios, se efectuarán en el día festivo que designe la convocatoria.

CAPITULO II

DE LA ELECCIÓN DE SENADORES POR LAS PROVINCIAS

Art. 13. El Senado de la Nación comunicará á los gobernadores de provincias las vacantes ocurridas cada tres años, con arreglo al artículo 48 de la Constitución, y las vacantes parciales de que habla el artículo 54 de la misma.

Art. 14. Para la renovación ordinaria del Senado nacional, las cámaras legislativas, por citación especial del gobernador respectivo, deberán reunirse y nombrar senadores antes del 1.º de marzo del año de la renovación. En caso de demora de la legislatura, el Senado, por medio del gobernador respectivo, puede requerirla á fin de que se verifique la elección.

Art. 15. Para llenar una vacante extraordinaria del Senado, el gobernador de la provincia á quien corresponda hacerlo, citará á la legislatura á practicar dentro de quince días la

elección del nuevo senador. Esta citación deberá ser hecha inmediatamente después de recibir la comunicación á que se refiere el artículo 13.

Art. 16. Las actas de las elecciones se comunicarán á los elegidos y al Senado nacional por conducto del gobernador. A los primeros para que les sirva de diploma, y al segundo para su conocimiento.

Art. 17. Los senadores electos que renuncien su nombramiento antes de ser aprobados por el Senado, lo comunicarán á la legislatura, la que procederá inmediatamente á la elección del reemplazante.

CAPITULO III

DE LA ELECCIÓN DE SENADORES POR LA CAPITAL

Art. 18. La elección de electores de senadores por la Capital, tendrá lugar el último domingo de marzo de los años á que corresponda su renovación. Los electores designados por la junta escrutadora del distrito de la Capital, se reunirán en el local del Senado antes del quince de abril, cuando sean elecciones ordinarias, ó diez días después de verificadas las extraordinarias, bastando un quorum de mitad más uno de sus miembros. Empezarán por hacer entre sí el nombramiento del presidente y secretario del cuerpo (que deben ser miembros del mismo), y procederán después á elegir senadores por bolines firmados, que entregarán al presidente y que éste leerá en voz alta. La elección del senador ó senadores, expresando á quien reemplazan, se hará por mayoría absoluta de votos de los electores presentes; y si ninguno de los candidatos la tuviese, se circunscribirá la nueva votación á los que hayan tenido mayor número de votos. El presidente decidirá en caso de empate, para lo que tendrá en esta circunstancia voto doble.

Art. 19. Esta elección tendrá lugar en una sola sesión, y proclamados que sean, por el presidente del cuerpo electoral, el senador ó senadores nombrados y el período de sus respectivas funciones, se labrarán dos ejemplares del acta, que, firmados por el presidente y el secretario, serán comunicados directamente al Senado para su conocimiento y al electo ó electos para que los sirvan de diploma.

Art. 20. Si el Senado desechase el nombramiento de senador ó senadores, por vicios en la composición del código electoral calificado, se comunicará inmediatamente al Poder ejecutivo, á fin de que convoque al pueblo á nueva elección de electores; pero si el nombramiento fuera anulado por no reunir el electo ó electos las condiciones constitucionales y legales requeridas para ser senador, ó por haber incurrido los electores calificados en una falta en el procedimiento capaz de anular el acto electoral, se comunicará al Poder ejecutivo para que convoque al colegio á verificar nueva elección, la que deberá practicarse dentro de los diez días siguientes del aviso.

Art. 21. Los electores calificados terminarán su mandato cuando haya sido aprobada por el Senado la elección de senador; y si esto no sucediere, lo conservarán durante las sesiones par-

lamentarias del año en que hubiesen verificado la elección, á efecto de proceder á una nueva, si aquella fuese anulada, ó conocer de las renuncias ó excusaciones á que se refiere el artículo siguiente.

Art. 22. Las renuncias y excusaciones de los sonadores electos, antes de aprobada su elección, serán presentadas al colegio de electores calificados, los que resolverán sobre la aceptación, procediendo á este caso á nuevo nombramiento dentro de los diez días siguientes.

CAPITULO IV

ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Art. 23. La elección de electores de presidente y vicepresidente de la República, tendrá lugar el primer domingo del mes de abril del año en que corresponda su renovación.

El presidente del Senado convocará la asamblea de ambas cámaras, por lo menos un mes después de hecha la elección prescripta en el artículo 81 de la Constitución, y de dos meses antes del día que termine el período de la presidencia y vicepresidencia salientes, á objeto de proceder á escrutinio y proclamación de presidente y vicepresidente, de conformidad con los artículos ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y cuatro y ochenta y cinco de la Constitución.

TITULO CUARTO

De los colegios electorales

CAPITULO I

DE LAS CONVOCATORIAS

Art. 24. En cada distrito electoral, la convocatoria á elecciones de diputados, de electores de presidente y vicepresidente de la Nación y de sonadores por la Capital, será hecha por el Poder ejecutivo de la respectiva provincia, ó por el de la Nación en su caso, por lo menos dos meses antes del día señalado para el acto electoral, en las siguientes condiciones:

- 1.ª La convocatoria deberá expresar en todos los casos el número de diputados ó electores á elegirse en cada distrito electoral.
- 2.ª Cuando no hubiese podido realizarse la elección en el día señalado, ó hubiese sido anulada, sólo podrá tener lugar nueva elección previa nueva convocatoria.
- 3.ª Las convocatorias serán publicadas y circuladas inmediatamente en cada distrito, ya sea en los diarios y periódicos donde los hubiese, ya en carteles ó hojas sueltas, que se fijarán en parajes públicos, ya por bandos que leerán los jueces de paz, donde no fuese posible otro medio de publicidad.

CAPITULO II

DE LA FORMACION DE COLEGIOS ELECTORALES

Art. 25. En la capital de la República y en las capitales y ciudades de las provincias, cada una de las secciones policiales constituye un colegio electoral, y en cada uno de estos colegios se formarán y serán designadas por números tantas mesas receptoras de votos cuantas series de doscientos ciudadanos enrolados habitan en cada una de ellas, congregados en razón de la proximidad de sus habitaciones. El Poder ejecutivo designará el lugar donde funcionarán estas mesas y su circuito.

Si en la división por series resultare una fracción inferior á doscientos ciudadanos electores, pero superior á cien, se constituirá una mesa para esa fracción, siempre que las habitaciones de estos ciudadanos estén próximas entre sí. Si la fracción fuera inferior á cien, ó dispersa, será incorporada á la serie ó á las series que quedaron más próximas, según determine el Poder ejecutivo.

Art. 26. La población rural que contenga más de doscientos ciudadanos enrolados, constituye un colegio electoral.

En estos colegios se formarán, y serán designadas por números, tantas mesas receptoras de votos cuantas series de doscientos ciudadanos enrolados existan en ellas, y una más para la fracción restante, siempre que no sea menor de cien. En este último caso la fracción restante será incorporada á alguna ó algunas de las series más próximas. El Poder ejecutivo determinará esta incorporación y designará el lugar donde funcionarán las mesas y su circuito.

Art. 27. Todo grupo de más de ciento cincuenta ciudadanos enrolados que habiten dispersos en aldeas ó habitaciones aisladas en el campo, constituye también un colegio electoral en una sola mesa, y el Poder ejecutivo determinará el lugar en que deberá congregarse sin salir de los límites del respectivo departamento ó partido.

Art. 28. Si el grupo fuese menor de ciento cincuenta, se incorporará al colegio ó colegios electorales más próximos dentro del mismo departamento ó partido, según determine el Poder ejecutivo.

Art. 29. En la designación del lugar donde han de funcionar las mesas, el Poder ejecutivo tendrá en cuenta los siguientes, en el orden que están enumerados: la municipalidad, los juzgados de paz, las escuelas, los edificios públicos no destinados al servicio del ejército ó de la policía, la casa del presidente del comicio.

Art. 30. Designado el lugar donde deben funcionar las mesas receptoras y su circuito, el Poder ejecutivo lo comunicará á las juntas escrutadoras, para que éstas lo hagan conocer del público, por lo menos quince días antes de la elección, por medio de carteles fijados en los parajes públicos de los colegios respectivos. Igual comunicación se hará á los jueces federales, á los efectos del artículo 34 de esta ley.

CAPITULO III

DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS

Art. 31. La mesa está constituida por un funcionario denominado presidente de comicio, que reúna las condiciones siguientes: ser elector en ejercicio, contribuyente territorial, saber leer y escribir y residir en el colegio electoral.

La junta escrutadora á que se refiere el artículo 51 de esta ley, hará los nombramientos de un presidente y dos suplentes para cada mesa, y en el caso de que en un colegio electoral no existan ciudadanos con las condiciones requeridas, puede dispensarse en el nombramiento de presidente y primer suplente la condición de residencia en el colegio, y el del segundo suplente la de ser contribuyente territorial.

El presidente y primer suplente tienen de todos modos que residir en el colegio electoral donde ejercen sus funciones.

Art. 32. A los efectos del artículo anterior, los gobernadores remitirán á la respectiva junta escrutadora, cuando ésta se las pida, las listas de los contribuyentes territoriales del distrito.

Art. 33. Los presidentes ó suplentes que ejerzan sus funciones fuera del colegio de su residencia, recibirán del gobierno de la Nación un viático de cincuenta pesos moneda nacional.

CAPITULO IV

DEL SUPRAGIO

Art. 34. Los jueces federales, tan pronto se haya dado cumplimiento á las disposiciones de los artículos 30 y 31 de esta ley, enviarán á la junta escrutadora del distrito dos listas, y á cada uno de los presidentes de comicio tres listas depuradas del padrón electoral que los corresponda.

Esto envío será hecho por medio de la dirección de correos de la capital respectiva, quien deberá distribuir las listas y entregarlas bajo recibo, que remitirá inmediatamente después al juez federal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 10 del artículo 26 de la ley 8130, las listas llevarán el número de la mesa á que correspondan y estarán encabezadas y terminadas con las fórmulas impresas de las actas á que se refieren los artículos 35 y 40 de esta ley, y se harán con los nombres de los ciudadanos comprendidos dentro de los circuitos de las mesas á que se refieren los artículos 25, 26 y 27 de las mismas y tendrán dos casillas: una delante de dichos nombres y otra en la margen derecha de la página: la primera para anotar si el ciudadano ha sufragado y la segunda para observaciones.

Uno de los ejemplares de estas listas se fijará en cada uno de los recintos designados para la elección, y antes que ésta empiece, en lugar bien visible y de fácil acceso.

Art. 35. El día señalado para la elección por la convocatoria respectiva, los presidentes de comicios ó sus suplentes se apersonarán en el

local de antemano designado por el Poder ejecutivo, á las 8 ante meridiano, munidos de todos los útiles á que se refiere el inciso 2.º del artículo 54, y cumplido lo dispuesto en la última parte del artículo anterior y en los artículos 41 y 43 de esta ley, verificada por la partida cívica la identidad de los apoderados presentes á que se refieren las procuraciones mencionadas en el artículo 10 de la misma, y cerciorados de que la urna ó valija, remitida por la junta escrutadora, está vacía y tiene intactos sus sellos, la colocarán sobre una mesa á la vista de todos y en lugar de fácil acceso, y declararán abierto el acto electoral, labrando un acta en los siguientes términos:

«En el día ..., á las 8 a. m., y en virtud de la convocatoria de ... para la elección de ... y en presencia de don N N y don N N, apoderados de los candidatos don N N y don N N, el subscrito, presidente del comicio, declara abierto el acto electoral en la mesa número ..., correspondiente al colegio electoral de ...»

Esta acta será firmada por el presidente del comicio y los apoderados de los candidatos. Si los apoderados no estuvieren presentes, no hubiese apoderados nombrados ó se negasen á firmar, el presidente consignará el hecho bajo su firma, haciéndolo testificar por los electores presentes, que firmarán después de él.

Art. 36. Los presidentes suplentes designados en el artículo 31 de esta ley, asistirán al acto electoral para substituir al efectivo en el caso que éste, por motivos justificados, hubiese estado impedido de asistir á dicho acto ó tuviese que ausentarse de la mesa.

Los apoderados que no se encontraran presentes á la apertura del acto electoral, serán reconocidos al tiempo que lleguen, sin retrotraer ninguna de las operaciones.

Art. 37. Abierto el acto electoral, procederán los electores á presentarse al presidente del comicio, por el orden que lleguen, dando su nombre y presentando su partida cívica, á fin de comprobar que los corresponde votar en la mesa. Dentro del recinto del comicio no podrán aglomerarse más de diez electores que no estén acreditados ante la mesa.

Art. 38. Hecha la comprobación prescripta en el artículo anterior, procederá el presidente á verificar la identidad del elector, oyendo á los apoderados de los candidatos.

En el acto de la elección no se admitirá, de persona alguna, discusión ni observación sobre hechos extraños á ella, y respecto del elector, sólo podrá admitirse, y únicamente de los apoderados de los candidatos, las que se refieren á su identidad.

Estas objeciones se limitarán á exponer notadamente el caso y de ellas se tomará nota sumaria en la columna de observaciones, frente al nombre del elector.

Art. 39. Si la identidad no es impugnada, el presidente del comicio entregará al elector un sobre abierto y vacío, y firmado en el acto por él de su puño y letra, y lo invitará á pasar á una habitación contigua á encerrar su voto en dicho sobre.

Art. 40. En el caso que la identidad del elector sea impugnada por alguno ó algunos de los apoderados de los candidatos, el presidente del comicio anotará en el sobre dicha impugnación usando las palabras «impugnado por el apode-

rado (ó apoderados) don N N y don N N, y en seguida, tomando la impresión digital del elector impugnado en una hoja de papel ad hoc, escribirá en ella el nombre, el número del enrolamiento y clase á que pertenece el elector, la firmará metiéndola en el sobre, y lo entregará abierto al mismo elector, invitándolo, como en el artículo anterior, á pasar á la habitación contigua. De esta impugnación se tomará nota en la casilla de observaciones de las listas, á que se refiere el artículo 34 de esta ley.

En el caso de que ninguno de los apoderados de los candidatos quiera firmar el sobre, el presidente del comicio así lo hará constar en el mismo sobre, pudiendo hacerlo firmar por alguno ó algunos de los electores presentes.

La negativa del ó de los apoderados impugnadores á firmar el sobre del elector impugnado se considera como anulación de la impugnación, pero bastará que uno solo firme para que subsista.

El elector impugnado, después de haber sufragado, será arrestado á la orden del presidente del comicio ó dará fianza pecuniaria ó personal suficiente á juicio del mismo presidente, que garantice su presentación á los jueces federales en el caso de que la junta escrutadora reconociera fundada la impugnación.

La fianza pecuniaria será de quinientos pesos moneda nacional, de que el presidente del comicio pasará recibo y que quedará en su poder. La personal será dada por un vecino conocido y responsable que por escrito se comprometa á presentar el asfianzado ó á pagar aquella cantidad, en caso de ser condenado.

El Poder ejecutivo, por intermedio de las juntas escrutadoras, proveerá á los presidentes de comicio de formularios de uno y otro documento y dará las instrucciones necesarias.

Art. 41. La habitación donde los electores pasan á encerrar su boleta en el sobre no puede tener más que una puerta utilizable, no debe tener ventanas y estará iluminada artificialmente en caso necesario.

Al presidente del comicio incumbe certificarlo del cumplimiento de esta disposición, y si no fuera posible disponer de una habitación que reúna estas condiciones, el mismo presidente sellará la puerta ó puertas superfluas y las ventanas, en la presencia de dos electores por lo menos, antes de empezar el acto electoral, y no levantará los sellos sino una vez él terminado.

En esta habitación habrá boletas de cada partido ó candidato aislado, entregadas al efecto al presidente del comicio por los apoderados.

Art. 42. Introducido en esta habitación y cerrada exteriormente la puerta por el presidente del comicio, el elector encerrará en el sobre su boleta de sufragio, volviendo inmediatamente al local donde funciona la mesa.

La boleta ya encerrada en el sobre será depositada por el mismo elector en la urna ó valija para la recepción de votos, que estará sujeta a una mesa, cerrada y sellada por la junta escrutadora del distrito, y sellada con el número de la mesa á que corresponde.

El elector no deberá retirar del sobre la impresión digital en el caso de haber sido impugnada su identidad. Si lo hace, este hecho constituirá, á los efectos penales, prueba suficiente de la verdad de la impugnación.

Las boletas que estén en un sobre con la nota «impugnadas» y de donde falte la impresión digital, no serán tenidas en cuenta en la operación del escrutinio.

Art. 43. Un cartel con las disposiciones del artículo anterior y de los artículos 49 y 51, en caracteres bien visibles, estará colocado sobre la vía pública, cerca de la puerta de entrada del local donde se realiza el acto electoral, de manera que los electores puedan enterarse de dichos artículos antes de entrar á ser identificados. El presidente del comicio cuidará del cumplimiento de esta disposición antes de empezar el acto electoral.

Art. 44. Pasado un minuto, ó antes si el elector lo pidiera desde adentro, el presidente del comicio abrirá la puerta de la habitación y sin entrar él mismo en dicha habitación, hará salir al elector. Acto continuo procederá á anotar, á la vista de los apoderados y del elector mismo, la palabra «votó» en la columna delante del nombre del elector que ha sufragado, en las listas á que se refiere el artículo 34 de esta ley. En la libreta del elector hará la misma anotación, firmándola de su puño y letra, consignando la fecha.

Art. 45. Las elecciones no podrán ser interrumpidas, y en caso de serlo por fuerza mayor, se expresará en acta separada el tiempo que haya durado la interrupción y las causas de ella.

Las elecciones terminarán á las 5 en punto de la tarde.

Art. 46. Terminada la elección, el presidente cubrirá la urna ó valija, en su abertura, con una hoja de papel fuerte que sellará, firmará y hará firmar por todos los presentes apoderados de los candidatos, con mención de los que se nieguen á hacerlo. Firmará igualmente, é invitará á los apoderados presentes á que firmen, la lista electoral á que se refiere el artículo 34 de esta ley, tachando los nombres de los electores que no hayan comparecido y dejando al pie de ella la anotación por escrito y en letras, del número de electores que sufragaron en el acto y de las protestas hechas, en los siguientes términos:

«Siendo las cinco p. m., se declaró terminado el acto electoral de esta mesa, habiendo sufragado en ella . . . electores y habiendo protestado de los hechos de esta elección los apoderados don N N y don N N, según el documento original que se acompaña.»

Si no hubiese protestas, las últimas palabras serán tachadas.

Art. 47. En seguida el mismo presidente cerrará en un sobre esta acta y la entregará personal ó inmediatamente, con la urna ó valija conteniendo los votos, á la oficina de correos más próxima, dentro de los límites del departamento ó partido. Todos los documentos á que se refiere el acta antedicha irán contenidos en el mismo sobre que ella, y de su entrega al correo, así como de la entrega de la urna ó valija, recibirá el presidente recibo en duplicado, con expresión de la hora en que lo hizo, y enviará uno de los recibos á la junta escrutadora en sobre aparte que entregará en el acto á la misma oficina de correos.

Art. 48. Sin perjuicio de los deberes inherentes á su cargo, relacionados con el orden

público general, los agentes de la policía local se pondrán en número suficiente á las órdenes de cada uno de los presidentes de comicios, á objeto de mantener la regularidad y libertad en el acto electoral y de hacer cumplir sin demora las resoluciones del mismo presidente y velar por el cumplimiento de las disposiciones de los artículos 37, inciso 2.º, 49 y 50 de esta ley.

Donde no hubiese agentes permanentes de policía, el presidente del comicio, por autoridad propia, designará, si lo considera necesario y mientras dure la necesidad, un número suficiente de electores de la serie que vote en su mesa, para los fines antedichos.

Art. 49. Ni en un radio de cincuenta metros del local donde funciona la mesa receptora ni en el local mismo donde está la mesa constituida, se puede entregar ó ofrecer boletas de sufragio á los electores.

Ningún elector puede presentarse en el local donde funciona la mesa receptora ostentando, aún doblada, su boleta de sufragio. Tan sólo después de haber sido introducido en la habitación en donde ha de encerrar su voto en el sobre y de haber sido cerrada exteriormente la puerta, podrá sacar dicha boleta de la pieza de su vestido donde la hubiere guardado, si no prefiere utilizarla de algunas de las que se encuentran, según lo dispuesto en el último inciso del art. 41 de esta ley, en la susodicha habitación.

Art. 50. El presidente del comicio hará retirar á los que no guarden en el acto electoral el comportamiento y moderación debida.

TITULO QUINTO

De las juntas electorales

CAPITULO I

DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS

Art. 51. En cada capital de provincia y en la Capital federal habrá una junta escrutadora compuesta por el presidente de la Cámara federal de apelaciones, el juez federal y el presidente del superior tribunal de justicia de la provincia respectiva ó, en la capital de la República, el presidente de la primera cámara de la civil.

En los distritos donde no exista cámara federal, formará parte de la junta el procurador fiscal federal. En este caso la presidencia de la junta escrutadora pertenece al juez federal, en el anterior al presidente de la cámara federal de apelaciones.

En todos los casos, el presidente tendrá voz y voto en las deliberaciones.

La junta no podrá adoptar ninguna resolución sin la concurrencia de todos sus miembros. En caso de impedimento de alguno, ó de todos ellos, la junta se integrará con los reemplazantes legales en cada uno de ellos.

Al presidente de la cámara federal, lo reemplazará el camarista más antiguo; al juez federal, el fiscal del juzgado; á éste un abogado

de la lista de conjuces, insculado por la cámara federal, y al presidente del superior tribunal de justicia local ó al presidente de la primera cámara de lo civil, su reemplazante legal.

Art. 52. Un mes antes del día fijado por la convocatoria para el acto electoral, la junta se reunirá en el local que designe y nombrará un secretario y los auxiliares y escribientes que crea necesarios y fijará la hora de sus reuniones haciéndola conocer del público por medio de los diarios.

Los secretarios, auxiliares y escribientes gozarán, mientras duren sus funciones, de un sueldo igual al de los de la misma categoría de los respectivos juzgados federales y sus nombramientos se comunicarán al ministerio del interior.

Art. 53. Con la mayor brevedad, el Poder ejecutivo nombrará peritos identificador para que ejerzan sus funciones cerca de estas juntas, en los casos previstos por esta ley y después que cada cual haya prestado juramento, ante el presidente de la junta, de ejercer fielmente su cargo.

Entregará asimismo el Poder ejecutivo, á las mismas juntas, las fojas personales de los ciudadanos enrolados en el distrito electoral respectivo, y los formularios, sobres, papeles especiales, sellos y urnas ó valijas que las juntas deben distribuir á los presidentes de comicio.

Art. 54. En los primeros días de sus reuniones, las juntas procederán á hacer los nombramientos prescriptos en el artículo 31, á mandar imprimir y fijar los carteles á que se refiere el artículo 30 de esta ley en la forma prescripta por el mismo, y á distribuir entre los presidentes de comicios todos los útiles recibidos del Poder ejecutivo, menos las urnas ó valijas.

Estas deberán ser entregadas á las mesas rurales en la víspera del día fijado por la convocatoria para el acto electoral, y en la capital del distrito en la mañana misma antes de la hora fijada para el comienzo del mismo acto. Las urnas se entregarán cerradas y selladas convenientemente, quedando las llaves en poder de las juntas.

CAPITULO II

DEL ESCRUTINIO

Art. 55. En sesión pública, la junta escrutadora, reunida en el local por ella escogido, el día siguiente al del acto electoral, cualquiera sea su objeto, y continuando sus trabajos en tantos otros días cuantos sean necesarios á la rápida ejecución de las operaciones de este capítulo, procederá:

- 1.º A verificar si no hay indicios de haber sido violentadas las urnas ó valijas que se hayan recibido.
- 2.º Si cada urna viene debidamente acompañada por los documentos á que se refiere el artículo 47 de esta ley.
- 3.º A abrir las urnas recibidas y á comparar el número de los sobres contenidos en ellas con la declaración del número

de sufragantes, hecha por el presidente del comicio respectivo al pie de la lista electoral de su mesa, según lo dispuesto por el artículo 46 de esta misma ley.

4.º A comparar la hora en que, según el acta, se terminó el acto electoral, con la de la entrega de la urna a la oficina de correos.

5.º A verificar al final de sus trabajos si se recibieron tantas urnas cuantas eran las mesas del distrito.

A todas estas operaciones tienen derecho de asistir los candidatos, ó uno de sus apoderados, al sólo objeto de fiscalizarlas en conformidad con esta ley. Siempre que varios candidatos hayan sido proclamados en una sola lista, deberán por mayoría nombrar un solo apoderado cerca de la junta.

Estas procuraciones serán hechas en la forma indicada y en el tiempo prescrito en el artículo 10 de esta ley.

Art. 50. Si hay indicios de haber violentado una urna ó valija, ó falta alguna ó algunas de éstas ó no viene acompañada debidamente por los documentos respectivos, ó el número de sobres no corresponde al de la declaración del presidente del comicio, la junta escrutadora levantará acta de estos hechos y declarará anulada la votación en la mesa respectiva, pasando los antecedentes al fiscal federal para los efectos penales ordenados por esta ley, y dando cuenta de ello al ministerio del interior para que haga activar los juicios.

Art. 57. Cuando la elección no se hubiese practicado en alguna ó algunas de las mesas ó se hubiese anulado la elección por algunas de las causas del artículo anterior, la junta dispondrá que se convoque nuevamente á los electores de dicha mesa ó mesas para el segundo domingo siguiente al de la elección anulada, salvo el caso previsto por el artículo 63.

Art. 58. Del tiempo mediado entre el final del acto electoral y la entrega de la urna en la oficina de correos, se tomará nota especial que, consignada en el acta general, pasará al Congreso como antecedente para discusión de la elección, si la hubiere.

Art. 59. Pasará después la junta al escrutinio de las boletas contenidas en cada urna, siguiendo en él lo dispuesto en el artículo 42, inciso 3 de esta ley. El presidente leerá en alta voz las boletas, que extraerá una á una de la urna ó valija, y pondrá de manifiesto á los otros miembros de la junta, candidatos ó sus apoderados, para que confronten el número de ellas con el de votantes anotados en las listas. Las boletas no inteligibles, las que no contengan nombres propios de personas ó contuviesen escritos varios, cuyo orden no puede determinarse, se considerarán en blanco. Si algún miembro de la junta, candidato proclamado ó apoderado, tuviese duda sobre el contenido de una boleta leída por el presidente, podrá pedir en el acto y deberá concedérsele, que la examine. En los casos de faltas de ortografía, leves diferencias de nombres y apellidos, inversión ó supresión de algunos de éstos, se decidirá en sentido favorable á la validez del voto y á su aplicación en favor de candidato conocido, cuando no figure en la elección otro con quien pueda confundirse. Si sobre éste ó sobre

la inteligencia de la boleta no hubiese desde luego unanimidad en la junta, se reservará para la terminación del escrutinio la decisión de la duda, y entonces se hará por mayoría.

La operación empezará siempre por los sobres que tengan la nota impugnada. De ellos se retirará la impresión digital del elector y será entregada á los peritos identificadores para que, después de compararla con la existente en la foja personal del elector impugnado, declare sobre la identidad. Si ésta no resultare probada, el voto no será tomado en cuenta en el cómputo; si resultare probada, el voto será tenido en cuenta y la junta ordenará al presidente de comicio la inmediata cancelación de la fianza del elector impugnado, ó su libertad en caso de arresto. Tanto en un caso como en el otro, los antecedentes se pasarán al fiscal federal para que sea exigida la responsabilidad al elector fraudulento ó al falso impugnador.

Art. 60. Hecha la suma general de todos los votos del distrito, en relación á cada uno de los sufragados, preguntará el presidente si hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio, y no habiéndose hecho ó después de resuelta por la mayoría de la junta las que se presenten, anunciará en alta voz su resultado, proclamando aquellos candidatos que hayan sido elegidos en el número que al distrito corresponde elegir.

En seguida se quemarán, en presencia de los concurrentes, las boletas extraídas de las urnas, con excepción de aquellas á que se hubiese negado validez ó que hubiesen sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán todas al acta á que se refiere el artículo siguiente, rubricadas por los miembros de la junta y por los candidatos ó apoderados que quieran hacerlo.

Art. 61. De todos los actos de escrutinio se levantará un acta general, firmada por el presidente de la junta y el secretario respectivo, que, acompañando las actas de los diversos accidentes previstos en el artículo anterior, las boletas á que él se refiere y las actas, listas y protestas enviadas por cada una de las mesas del distrito, será remitida en paquete sellado y lacrado al presidente de la Cámara de diputados ó al de la Cámara de senadores, según el caso. En dicha acta la junta señalará las causas que á su juicio fundan la validez ó nulidad de la elección. A cada uno de los electos se dará un duplicado de la susodicha acta general para que lo sirva de diploma.

Art. 62. Concluidas todas las operaciones antes indicadas, las juntas escrutadoras harán conocer á los procuradores fiscales, para que entablen el proceso correspondiente, los nombres de los electores del distrito que no hayan cumplido el deber impuesto por el artículo 6.º de esta ley.

TITULO SEXTO

Del escrutinio por el Congreso

CAPITULO UNICO

Art. 63. Es nula la elección de un distrito electoral, en donde no haya habido elecciones válidas en dos tercios de las mesas receptoras del mismo distrito.

Declarada la nulidad de una elección, la Cámara de diputados, ó el Senado, comunicará al Poder ejecutivo nacional ó al gobierno de la provincia respectiva, según el caso, dicha anulación, para que se proceda á una nueva convocatoria, de conformidad con esta ley.

Art. 64. En los casos en que «prima facie» pueda parecer delictuosa la demora en la entrega de la urna y documentos, según prescribe el artículo 47 de esta ley, el presidente de la Cámara de diputados, ó de la Cámara de senadores, según el caso, pasará los antecedentes al fiscal federal del distrito á que correspondan, á los efectos del enjuiciamiento del culpable.

TITULO SEPTIMO

Prohibiciones y penas

CAPITULO I

DISPOSICIONES PROHIBITIVAS

Art. 65. Queda prohibida la aglomeración de tropas, ó cualquier ostentación de fuerza armada, en el día de la recepción del sufragio.

Sólo los presidentes de comicio podrán tener á su disposición la fuerza policial necesaria para atender al mejor cumplimiento de esta ley.

Las fuerzas nacionales y provinciales, con excepción de la de policía destinada á guardar el orden, que se encontrasen en la localidad en que tenga lugar la elección, se conservarán acuarteladas durante el tiempo de ella.

Art. 66. Está prohibido á los funcionarios públicos imponer á sus subalternos que se adhieran á partidos ó que voten por candidatos determinados.

Art. 67. Queda prohibido á los jefes, oficiales ó funcionarios superiores de línea y armada y autoridades policiales, nacionales y provinciales, enebazar grupos de ciudadanos durante la elección, y hacer valer en cualquier momento la influencia de sus cargos para constar la libertad del sufragio, y asimismo hacer reuniones con el propósito de influir en forma alguna en los actos electorales.

Art. 68. Es prohibido, en los centros urbanos, al propietario que habite una casa situada dentro de un radio de una cuadra alrededor de una mesa receptora, ó á su inquilino, el admitir reunión de electores, ni depósito de armas, durante las horas de la elección. Si la casa fuese tomada á viva fuerza, deberá el propietario ó inquilino dar aviso inmediato á la autoridad policial.

Art. 69. Durante el día del comicio, hasta pasado una hora de la clausura del mismo, no será permitido tener abiertas las casas destinadas á expendio de bebidas alcohólicas de cualquier clase.

Art. 70. Es prohibido á los electores la portación de armas, el uso de banderas, divisas ó otros distintivos durante todo el día de la elección y las noches anterior y siguiente del mismo.

CAPITULO II

VIOLACIONES DE LA LEY ELECTORAL

Art. 71. Cometo violación contra el ejercicio del sufragio toda persona particular ó pública que por hechos ó omisiones, y de un modo directo ó indirecto, impida ó contribuya á impedir que las operaciones se realicen con arreglo á la Constitución y á la presente ley. La intención delictuosa se presume siempre en las violaciones de las leyes electorales.

Art. 72. Será culpable del delito previsto y penado por el artículo 281, primera parte del código penal, todo funcionario que intervenga en la confección de las listas á que se refiere el artículo 34 de esta ley, que en cualquier forma falsifique, adultere, destruya, sustraiga ó modifique antes, durante ó después de la elección, ó de la formación de las listas antedichas, actas ó documentos electorales. Las personas que sin ejercer cargo legal cooperen, concurran ó faciliten la falsificación, adulteración, destrucción, sustracción ó modificación de dichos documentos, sufrirán la pena establecida en el segundo párrafo del artículo citado.

El juicio sobre estos delitos será absolutamente independiente de la aprobación ó desaprobación del acto electoral por las cámaras del Congreso.

Art. 73. Impiden el libre ejercicio del sufragio y serán por ello penados:

- 1.º Con quince días de arresto los que hicieren uso de banderas, divisas ó otros distintivos, durante el día de la elección y las noches anterior y siguiente;
- 2.º Con tres meses de arresto los que cargasen armas;
- 3.º Con la misma pena los que con dictorios, amenazas, injurias ó cualquier otro género de demostraciones violentas, intentasen coartar la voluntad del sufragante;
- 4.º También con la misma pena los dueños de las casas en que se expenden bebidas, si burlasen la prohibición del artículo 69;
- 5.º Con cuatro meses de arresto los que vendan votos; con seis meses de arresto los que compren votos;
- 6.º Con seis meses de arresto los que pretendan votar ó voten con nombre supuesto;
- 7.º Con la misma pena los que con cualquier ardid, engaño ó seducción, secuestrasen al elector durante las horas del comicio, impidiéndole dar su voto; con ocho meses si para ello usasen de violencia;
- 8.º Con un año de prisión á los dueños ó inquilinos principales de las casas á que se refiere el art. 68, si no diesen aviso á la autoridad al conocer el hecho;
- 9.º Con la misma pena los que detuviesen, demorasen ó estorbasen, por cualquier medio, á los correos, mensajeros, chasques ó agentes encargados de la conducción de pliegos de cualquiera de las autoridades encargadas de la ejecución de esta ley.

Art. 74. Serán penados con prisión de un año á diez y ocho meses los particulares que realicen los siguientes hechos:

- 1.º El secuestro de un elector de senadores ó de presidente ó vicepresidente de la República, y el de los demás funcionarios á quienes esta ley encomienda los actos preparatorios y ejecutivos de las elecciones, privándolos del ejercicio de sus funciones;
- 2.º La promoción de desórdenes que tengan por objeto suspender la votación ó impedir la por completo;
- 3.º El apoderarse de casas situadas dentro de un radio de una cuadra alrededor de un recinto del comicio, como lo prevé el artículo 68.

Art. 75. Serán igualmente penados con prisión de un año á diez y ocho meses los funcionarios públicos que, en violación á esta ley, contribuyan á uno de los actos ó á una de las omisiones siguientes:

- 1.º A que las listas electorales, ya preparatorias, ya definitivas, no sean formadas con exactitud ó no permanezcan expuestas al público por el tiempo y en los parajes prescriptos;
- 2.º A todo cambio de días, horas ó lugares preestablecidos para las distintas formalidades de la ley;
- 3.º A toda práctica fraudulenta de las operaciones de formación de las listas y demás documentos y actas escritas;
- 4.º A que las actas, fórmulas ó informes de cualquier clase que la ley prevé, no sean redactados en su forma legal; ó no sean firmados ó transmitidos en tiempo oportuno ó por las personas que deban suscribirlos;
- 5.º A proclamar un falso resultado de una votación y hacer cualquiera otra declaración falsa ó otro hecho que importe ocultar la verdad en el curso de la operación electoral.

Art. 76. Se hallan en la misma categoría del artículo anterior ó incurrirán en la multa de quinientos pesos moneda nacional, aplicados al fondo de escuelas de la Capital ó de la provincia á que pertenezca el multado; los miembros del Congreso que sin causa justificada faltasen á la sesión á que se refiere el artículo 23.

Art. 77. Están sujetos á la pena de un año á diez y ocho meses de prisión los autores y cooperadores de los siguientes hechos:

- 1.º El presidente de comicio, que debiendo prestar amparo á un elector, según lo dispuesto en el artículo 4.º, no lo hiciera;
- 2.º El agente de policía, que estando á las órdenes del presidente de comicio, no le obedeciere;
- 3.º El que debiendo recibir ó conducir listas y actas de una elección, y los que estando encargados de su conservación y custodia, quebrantaron los sellos ó rompieron los sobres que las contengan;

4.º Los empleados civiles, militares ó policiales, que interviniesen para dejar sin efecto las disposiciones de los funcionarios electorales, y los que teniendo á sus órdenes fuerza armada, hiciesen reuniones para influir en las elecciones;

5.º Los que desempeñando alguna autoridad privasen, por cualquier otro medio ó recurso, de la libertad personal á un elector, impidiéndole dar su voto;

6.º Todos los funcionarios creados por esta ley, cuando no concurren al ejercicio de su mandato, ó injustificadamente lo abandonen después de entrar en él, ó impidiesen ó influyesen para que otros no cumplan con su deber;

7.º Los autores de intimidación ó cohecho, consistiendo la primera en actos que hayan debido infundir temor de daños y perjuicios á un espíritu de ordinaria firmeza; y el segundo, en el pago, ó promesa de pago, de algo apreciable en dinero, y por parte del que desempeña funciones públicas, en la promesa de dar ó de conservar un empleo.

Art. 78. Serán penados con arresto de seis meses á un año:

- 1.º Los miembros de la justicia federal y local de la Capital y de las provincias, comprendidos los jueces de paz, asesores, fiscales, defensores y secretarios; los empleados y funcionarios de la policía de la Capital y de las provincias y los empleados del registro civil, dependientes del gobierno de la Nación y de las provincias, de cualquier jerarquía que sean, que directa ó indirectamente tomen participación política en favor de partido ó candidato determinado, ó que durante las luchas ó en cualquier tiempo hagan un acto de adhesión ostensible ó de oposición manifiesta con relación á los partidos políticos existentes ó en formación, salvo el deber de emitir su voto;

2.º Los funcionarios públicos, nacionales ó provinciales que tengan bajo su dependencia, como jefes de repartición ó oficinas, uno ó más empleados y los induzcan á adherirse á candidatos ó partidos determinados.

Art. 79. Los miembros del Poder ejecutivo que no cumplan los deberes ó procedan con parcialidad en el desempeño de las funciones que esta ley les impone, incurrirán en falta grave á los efectos del juicio político.

Art. 80. El elector, que sin causa legítima dejase de emitir su voto en cualquier elección efectuada en su distrito, será penado:

- 1.º Con la publicación de su nombre por la junta escrutadora respectiva, como censura, por haber dejado de cumplir su deber electoral;
- 2.º Con la multa de diez á mil pesos moneda nacional, y en caso de reincidencia inmediata, con el doble de la multa

que se le haya impuesto por la infracción anterior.

La penalidad será impuesta por el juez federal del distrito en juicio público, por acusación fiscal ó de cualquier ciudadano y la multa se hará efectiva por la vía de apremio á pedido del consejo de educación del distrito, del fiscal, de cualquier ciudadano, ó de oficio. Todas las actuaciones se harán en papel simple.

Art. 81. No incurrirán en dicha responsabilidad los electores analfabetos ó los que dejaren de votar por residir á más de diez kilómetros de la mesa ó haber tomado nuevo domicilio en otro colegio electoral. Tampoco incurrirán en ellas los impedidos por enfermedad, por ausencia fuera del país ó por causa justificada, dentro del país ó por otro impedimento legítimo debidamente comprobado ante el juez competente.

Art. 82. El ó los apoderados de candidatos que hayan hecho una falsa impugnación de identidad contra algún elector, estarán obligados á pagarle una indemnización fija de doscientos pesos moneda nacional, si hubiese quedado arrestado hasta la comprobación á que se refiere el inciso 2.º del artículo 59, salvo prueba de haber procedido de buena fe.

Del pago de esta indemnización, será solidariamente responsable, con cada uno de ellos, el candidato ó grupo de candidatos que lo ó los hubiere acreditado. El interesado puede hacer efectivo el cobro de la misma por vía de apremio ante la justicia federal.

Art. 83. El ciudadano que, designado por el presidente del comicio, en virtud del artículo 48, inciso 2.º, para mantener la regularidad y libertad del acto electoral no lo obedeciera ó se retirara sin motivo justificando antes de terminar dicho acto, será penado con una multa de veinte pesos moneda nacional.

CAPITULO III

DE LOS JUICIOS DE LA MATERIA ELECTORAL

Art. 84. Todos los juicios motivados por infracciones á esta ley, serán substanciados ante los juzgados federales con intervención del agente fiscal.

Art. 85. Todos los juicios que se substancien ante cualquier autoridad ó tribunal singular ó colegiado, por infracciones á esta ley ó en sostenimiento, defensa ó garantía del ejercicio del sufragio serán breves y sumarios; las partes deberán concurrir al comparendo á que se les cite, provistas de toda la prueba que deban producir; no son admisibles en ellos cuestiones previas, pues todas deben ventilarse y quedar resueltas en un solo y mismo acto.

Art. 86. Todas las faltas y delitos electorales podrán ser acusados por cualquier elector, con tal que pertenezca al mismo distrito electoral, sin que el demandante esté obligado á dar fianza ni caución alguna, sin perjuicio de

las acciones y derechos del acusado, si la acusación es maliciosa.

Art. 87. Las reglas á observar en estos juicios, son las siguientes:

1.º Presentada la acusación, el tribunal citará á juicio verbal y actuado al acusador y al acusado, dentro de los diez días después de la citación;

2.º Si resultase necesaria la prueba, se podrá fijar un término, como base de tres días, durante los cuales deberán solicitarse todas las diligencias conducentes á producirla;

3.º Los jueces, á petición de parte, podrán solicitar de quien corresponda, la remisión del documento que se denuncie como falsificado ó adulterado, á los efectos del juicio, y vencidos los tres días fijados en el inciso anterior, y recibido el documento ó documentos pedidos, se citarán inmediatamente á una nueva audiencia en la cual se examinarán testigos públicamente, se oirá la acusación y la defensa, y levantándose acta de todo, se citará en la misma acta á las partes para sentencia, las que dictará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes del comparendo, previa vista del agente fiscal;

4.º El retardo de justicia, en estos casos, será penado con multa de doscientos á quinientos pesos;

5.º El procedimiento de las causas electorales continuará aunque el querellante desista, y la sentencia que se diere producirá ejecutoria aunque se dicte en rebeldía del acusado.

Art. 88. Toda sentencia definitiva será apelable para ante las cámaras federales de apelación, de los fallos de los jueces de sección.

Art. 89. A objeto de asegurar la libertad, seguridad ó inmunidad individual ó colectiva de los electores, el juez nacional en las capitales ó ciudades donde ejerza sus funciones, y los jueces letrados ó de paz, respectivamente de cada colegio electoral, mantendrán abiertas sus oficinas durante las horas de la elección, para recibir y resolver verbal ó inmediatamente las reclamaciones de los electores que se viesen amenazados ó privados del ejercicio del voto.

A este efecto, el elector por sí ó otro ciudadano en su nombre, por escrito ó verbalmente, podrá denunciar el hecho ante el juez respectivo, y las resoluciones de este funcionario se cumplirán sin más trámite, por medio de la fuerza pública, si fuese necesario.

Art. 90. Cuando no sea posible hacer efectivo el importe de una multa, por falta de recursos del condenado, éste sufrirá arresto en razón de un día por cada cinco pesos.

Art. 91. Las multas que por esta ley se establecen, serán destinadas para el fomento de la educación común en los respectivos distritos.

TITULO OCTAVO

Disposiciones generales

CAPITULO UNICO

Art. 92. Para tomar posesión de todo destino público, será requisito indispensable en los mayores de dieciocho años, exhibir su libreta con la anotación de su voto ó la última elección de su distrito ó certificación por el juez federal competente, de no ser elector, ó de estar exento de la obligación de votar ó de haber justificado la omisión del voto ante el mismo juez.

Art. 93. El Poder ejecutivo determinará por decreto, los formularios y modelos de todos los útiles necesarios para el cumplimiento de esta ley.

Art. 94. Todas las remisiones de los jueces federales, juntas escrutadoras y jueces de comicios, serán hechas por medio del servicio de correos. Su dirección organizará un servicio especial para el cumplimiento de todas las obligaciones que esta ley le atribuye, llevando cuenta de los gastos que este servicio origine, para imputárselo á la misma ley.

Art. 95. Las publicaciones que deban hacerse en cumplimiento de esta ley, se harán por medio de carteles impresos que se colocarán en los lugares públicos de los distritos, según las juntas escrutadoras determinen.

Art. 96. Queda autorizado el Poder ejecutivo, para hacer en todo tiempo, de rentas generales, los gastos que demande la ejecución de la presente ley.

Art. 97. Deróganse todas las leyes electorales anteriores á la presente.

Art. 98. Comuníquese al Poder ejecutivo.

Sala de la comisión, septiembre 29 de 1911.

José Fonrouge—Marco A. Avallana—
da—N. A. Calvo—C. Conforti—H.
Pareja.

En disidencia sobre el artículo 6.º.

N. A. Calvo.

En disidencia; por las razones que expone
os aconseja la sanción del artículo 44 del pro-
yecto del Poder ejecutivo.

José Fonrouge.

PROYECTO DE LEY

A la honorable Cámara de diputados.

TITULO PRIMERO

De la calidad, derechos y deberes del elector

CAPITULO I

DE LOS ELECTORES

Artículo 1.º Son electores nacionales los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los diez y ocho años cumplidos de edad, siempre que estén inscriptos, unos y otros, en el padrón electoral.

Art. 2.º Están excluidos del padrón electoral:

1.º Por razón de incapacidad.

- a) Los dementes declarados en juicio.
- b) Los sordo-mudos que no sepan hacerse entender por escrito.

2.º Por razón de su estado y condición:

- a) Los eclesiásticos regulares;
- b) Los soldados, cabos y sargentos de la tropa de línea y armada y agentes ó gendarmes de policía;
- c) Los detenidos por juez competente mientras no recuperen su libertad;
- d) Los dementes y mendigos, mientras estén reclusos en asilos públicos, y en general, todos los que se hallen aislados en hospicios públicos ó estén habitualmente á cargo de congregaciones de caridad.

3.º Por razón de indignidad.

- a) Los condenados por sentencia á pena de presidio ó penitenciaria;
- b) Los reincidentes y los condenados por delito contra la propiedad, por cinco años.
- c) Los penados por falso testimonio ó por delitos electorales, por cinco años.
- d) Los que hubieren sido declarados por autoridad competente, incapaces de desempeñar funciones políticas.
- e) Los quebrados fraudulentos, hasta su rehabilitación;
- f) Los que hubiesen sido privados de la tutela ó curatela, por defraudación de los bienes del menor ó del incapaz, mientras no restituyan lo adeudado;
- g) Todos aquellos que se hallen bajo la vigencia de una pena temporal, hasta que ésta sea cumplida;
- h) Los que hubiesen eludido las leyes sobre servicio militar, hasta que hayan cumplido cuarenta y cinco años.
- i) Los que hubiesen sido excluidos del ejército con pena de degradación, ó por desertión, hasta diez años después de la condena;

j) Los deudores por defraudación ó malversación de caudales públicos, mientras no satisfagan su deuda;

k) Los dueños y gerentes de prostibulos;

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS DEL ELECTOR

Art. 3.º Ninguna autoridad podrá reducir á prisión al ciudadano elector durante las horas de la elección, salvo en caso de flagrante delito, ó cuando existiera orden emanada de autoridad competente. Fuera de este caso, no podrá estorbársele el tránsito de su domicilio al lugar de la elección, ó molestársele en el desempeño de sus funciones.

Art. 4.º Toda persona que se hallase bajo la dependencia legal de otra, tendrá derecho á ser amparada para dar su voto, recurriendo al efecto á los magistrados á que se refiere el artículo 95, ó á falta de éstos, al presidente del comicio, en la mesa donde le corresponde votar.

Art. 5.º El sufragio es individual y ninguna autoridad, ni persona, ni corporación, ni partido ó agrupación política, puede obligar al elector á votar en grupos de cualquier naturaleza ó denominación que sea.

CAPITULO III

DE LOS DEBERES DEL ELECTOR

Art. 6.º Todo elector tiene el deber de votar en cuantas elecciones nacionales fueren convocadas en su distrito.

Art. 7.º Quedan exentos de esta obligación:

- 1.º Los electores mayores de setenta años;
- 2.º Los jueces y sus auxiliares que, por disposición de esta ley, deben asistir en sus oficinas y tenerlas abiertas durante las horas de la elección.

Art. 8.º Todas las funciones que esta ley atribuye á los encargados de darle cumplimiento, son irrenunciabiles.

TITULO SEGUNDO

De la proclamación de candidatos

CAPITULO UNICO

DE LOS CANDIDATOS Y SUS APODERADOS

Art. 9.º Quince días antes del fijado por la convocatoria para el acto electoral, todo ciudadano públicamente proclamado candidato, puede dirigirse á la junta escrutadora del distrito, nombrando un apoderado para todas ó algunas de las mesas del distrito electoral, por el cual quiere hacerse elegir.

Estos apoderados no tienen otra misión que la de fiscalizar, en conformidad con esta ley, las operaciones del acto electoral.

Art. 10. En plazo máximo de ocho días antes del fijado para dicho acto, remitirá cada uno de los candidatos á la junta correspondiente, para que ésta las envíe á los respectivos presidentes de comicio, hasta la víspera del día señalado para la elección, las procuraciones nombrando apoderados ante cada una de las mesas receptoras de votos. Siempre que varios candidatos hayan sido proclamados en una sola lista, deberán, colectivamente, nombrar un solo apoderado para cada mesa.

Estas procuraciones serán hechas en papel común bajo firma del interesado, autenticada por notario público, y tendrán precisamente de recar en electores en ejercicio, pertenecientes á la serie que vote en la mesa junto á la cual están acreditados, que no sean empleados públicos, nacionales ni provinciales, y que sepan leer y escribir.

Art. 11. Los candidatos serán personal y solidariamente responsables de las impugnaciones hechas por sus apoderados contra algún elector, si después resultasen reconocidas falsas por las juntas de escrutinio.

TITULO TERCERO

De las elecciones parlamentarias
y presidenciales

CAPITULO I

Art. 12. Las elecciones de diputados al Congreso, tendrán lugar el primer domingo de abril, en todos los años de número par. Las elecciones extraordinarias que ocurran por vacante dentro de los períodos ordinarios, se efectuarán en el día festivo que designe la convocatoria; la que deberá hacerse dentro de los diez días siguientes al aviso que dé la cámara al Poder ejecutivo que corresponda.

CAPITULO II

DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR LAS
PROVINCIAS

Art. 13. El Senado de la Nación, comunicará á los gobernadores de provincias las vacantes ocurridas cada tres años, con arreglo al artículo 48 de la Constitución, y las vacantes purcificas de que habla el artículo 54 de la misma.

Art. 14. Para la renovación ordinaria del Senado nacional las cámaras legislativas, por citación especial del gobernador respectivo, deberán reunirse y nombrar senador antes del 1.º de marzo del año de la renovación. En caso de demora de la legislatura el Senado, por medio del gobernador respectivo, puede requerirla á fin de que verifique la elección.

Art. 15. Para llenar una vacante extraordinaria del Senado, el gobernador de la provincia á quien corresponda hacerlo, citará á la legislatura á practicar dentro de quince días la elección del nuevo senador. Esta citación deberá ser hecha inmediatamente después de recibir la comunicación á que se refiere el artículo 13.

Art. 16. Las actas de las elecciones se comunicarán á los elegidos y al Senado nacional por conducto del gobernador. A los primeros para que les sirva de diploma y al segundo para su conocimiento.

Art. 17. Los senadores electos que renuncien su nombramiento antes de ser aprobado por el Senado, lo comunicarán á la legislatura, la que procederá inmediatamente á la elección del reemplazante.

CAPITULO III

DE LA ELECCIÓN DE SENADORES POR LA CAPITAL.

Art. 18. La elección de electores de senadores por la Capital, tendrá lugar el último domingo de marzo de los años á que corresponda su renovación. Los electores designados por la junta escrutadora del distrito de la Capital, se reunirán en el local del Senado antes del quince de abril, cuando sean elecciones ordinarias ó diez días después de verificadas las extraordinarias, bastando un *quorum* de mitad más uno de sus miembros. Empezarán por hacer el nombramiento del presidente y secretario del cuerpo, que deben ser miembros del mismo, y procederán después á elegir senadores por boletines firmados, que entregarán al presidente y que éste leerá en voz alta. La designación de senador ó senadores, expresando á quien reemplazan, se hará por mayoría absoluta de votos de los electores presentes; y si ninguno de los candidatos la tuviese, se circunscribirá la nueva votación á los que hayan tenido mayor número de votos. El presidente decidirá en caso de empate, para lo que tendrá en esta circunstancia voto doble.

Art. 19. Esta elección tendrá lugar en una sola sesión; y proclamados que sean, por el presidente del cuerpo electoral, el senador ó senadores nombrados y el período de sus respectivas funciones, se labrarán dos ejemplares del acta, que firmados por el presidente y el secretario, serán comunicados directamente al Senado para su conocimiento y al electo ó electos, para que les sirvan de diploma.

Art. 20. Si el Senado desechase el nombramiento de senador ó senadores, por vicios en la composición del colegio electoral calificado, se comunicará inmediatamente al Poder ejecutivo, á fin de que convoque al pueblo á nueva elección de electores; pero si el nombramiento fuera anulado por no reunir el electo ó electos las condiciones constitucionales y legales requeridas para ser senador, ó por haber incurrido los electores calificados en una falta en el procedimiento capaz de anular el acto electoral, se comunicará al Poder ejecutivo para que convoque al colegio á verificar nueva elección; la que deberá practicarse dentro de los diez días siguientes al aviso.

Art. 21. Los electores calificados terminarán su mandato cuando haya sido aprobada por el Senado la elección de senador; y si esto no sucediere, lo conservarán durante las sesiones parlamentarias del año en que hubiesen verificado la elección, á efecto de proceder á una nueva, si aquélla fuese anulada, ó conocer de las renunciaciones ó excusaciones á que se refiere el artículo siguiente.

Art. 22. Las renunciaciones y excusaciones de los senadores electos, antes de aprobada su elección, serán presentadas al colegio de electores calificados, los que resolverán sobre la aceptación, procediendo en este caso á nuevo nombramiento dentro de los diez días siguientes.

CAPITULO IV

ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Art. 23. La elección de electores de presidente y vicepresidente de la República, tendrá lugar el segundo domingo del mes de abril del año en que corresponde su renovación.

El presidente del Senado convocará la asamblea de ambas cámaras, por lo menos un mes después de hecha la elección prescrita en el artículo 81 de la Constitución, y de dos meses antes del día que termine el período de la presidencia y vicepresidencia saliente, á objeto de proceder á escrutinio y proclamación de presidente y vicepresidente, de conformidad con los artículos ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y cuatro y ochenta y cinco de la Constitución.

TITULO CUARTO

De los colegios electorales

CAPITULO I

DE LAS CONVOCATORIAS

Art. 24. En cada distrito electoral, la convocatoria á elecciones de diputados, de electores de presidente y vicepresidente de la Nación y de senadores por la Capital será hecha por el Poder ejecutivo de la respectiva provincia, ó por el de la Nación en su caso, por lo menos dos meses antes del día señalado para el acto electoral, en las siguientes condiciones:

- 1.ª La convocatoria deberá expresar en todos los casos el número de diputados ó electores á elegirse en cada distrito electoral.
- 2.ª Cuando no hubiese podido realizarse la elección en el día designado, ó hubiese sido anulada, sólo podrá tener lugar nueva elección previa nueva convocatoria.
- 3.ª Las convocatorias serán publicadas y circuladas inmediatamente en cada distrito, ya sea en los diarios y periódicos

donde los hubiere, ya en carteles ú hojas sueltas, que se fijarán en parajes públicos, ya por bandos que leerán los jueces de paz, donde no fuese posible otro medio de publicidad.

CAPITULO II

DE LA FORMACIÓN DE LOS COLEGIOS ELECTORALES

Art. 25. En la capital de la República y en las capitales y ciudades de las provincias, cada una de las secciones policiales constituya un colegio electoral y en cada uno de estos colegios se formarán y serán designados por números tantas mesas receptoras de votos cuantas series de doscientos ciudadanos enrolados habitan en cada una de ellas, congregados en razón de la proximidad de sus habitaciones. El Poder ejecutivo designará el lugar donde funcionarán estas mesas y su circuito.

Si en la división por series, resultare una fracción inferior á doscientos ciudadanos electores, pero superior á cien, se constituirá una mesa para esta fracción, siempre que las habitaciones de estos ciudadanos estén próximas entre sí. Si la fracción fuera inferior á cien, ó dispersa, será incorporada á la serie ó á las series que quedaren más próximas, según determine el Poder ejecutivo.

Art. 26. Toda población rural que contenga más de doscientos ciudadanos enrolados, constituya un colegio electoral.

En estos colegios se formarán, y serán designadas por números, tantas mesas receptoras de votos, cuantas series de doscientos ciudadanos enrolados existan en ellas y una más para la fracción restante, siempre que no sea menor de cien. En este último caso la fracción restante será incorporada á alguna ó algunas de las series más próximas. El Poder ejecutivo determinará esta incorporación y designará el lugar donde funcionarán las mesas y su circuito.

Art. 27. Todo grupo de más de ciento cincuenta ciudadanos enrolados que habiten dispersos en aldeas ó habitaciones aisladas en el campo, constituya también un colegio electoral de una sola mesa, y el Poder ejecutivo determinará el lugar en que deberá congregarse sin salir de los límites del respectivo departamento ó partido.

Art. 28. Si el grupo fuese menor de ciento cincuenta, se incorporará al colegio ó colegios electorales más próximos dentro del mismo departamento ó partido, según determine el Poder ejecutivo.

Art. 29. En la designación del lugar donde han de funcionar las mesas, el Poder ejecutivo tendrá en cuenta los siguientes en el orden que están enumerados: la municipalidad, los juzgados de paz, las escuelas, los edificios públicos no destinados al servicio del ejército ó de la policía, la casa del presidente del comicio.

Art. 30. Designado el lugar donde funcionarán las mesas receptoras, y su circuito, el Poder ejecutivo lo comunicará á las juntas escrutadoras, para que éstas lo hagan conocer

del público, por lo menos quince días antes de la elección, por medio de carteles fijados en los parajes públicos de los colegios respectivos. Igual comunicación se hará á los jueces federales, á los efectos del artículo 34 de esta ley.

CAPITULO III

DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS

Art. 31. La mesa está constituida por un funcionario denominado presidente de comicio, que reuna las condiciones siguientes: ser elector en ejercicio, contribuyente territorial, saber leer y escribir y residir en el colegio electoral.

El Poder ejecutivo hará los nombramientos de un presidente y un suplente para cada mesa y en el caso de que en un colegio electoral, no existan ciudadanos con las condiciones requeridas, puede designar otros que las reúnan todas, menos la de residencia en el colegio, pero sí en el distrito electoral.

El Poder ejecutivo tan pronto haya hecho estos nombramientos, los comunicará á los jueces federales y á las juntas escrutadoras para los efectos consignados en esta ley.

Art. 32. A los efectos del artículo anterior, los gobernadores de provincia remitirán al ministerio del interior, cuando éste se las pida, las listas de los contribuyentes territoriales de cada provincia.

Art. 33. Los presidentes ó suplentes que ejerzan sus funciones fuera del colegio de su residencia recibirán, del gobierno de la Nación, un viático de cincuenta pesos moneda nacional.

CAPITULO IV

DEL SUPRAGIO

Art. 34. Los jueces federales, tan pronto hayan recibido las comunicaciones á que se refieren los artículos 30, 31 y 35 de esta ley, enviarán á la junta escrutadora del distrito dos listas y á cada uno de los presidentes del comicio tres listas depuradas del padrón electoral que les corresponda.

Este envío será hecho por medio de la dirección de correos de la capital respectiva, quien deberá distribuir las listas y entregarlas bajo recibo, que remitirá inmediatamente después al juez federal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 10 del artículo 2.º de la ley número 8130, las listas estarán encabezadas y terminadas con las fórmulas impresas de las actas á que se refieren los artículos 35 y 47 de esta ley, y se harán con los nombres de los ciudadanos comprendidos dentro de los circuitos de las mesas á que se refieren los artículos 25, 26, 27 y 28 de la misma y tendrán dos casillas, una delante de dichos nombres y otra en la margen derecha de la página: la primera para anotar si el ciudadano ha sufragado y la segunda para observaciones.

Cada lista tendrá el número que corresponda a la mesa receptora en donde los ciudadanos en ella contenidos deben sufragar, y estará expuesta durante tres días en los juzgados para permitir a los ciudadanos que reclamen, en caso de error en los nombres ó en los domicilios, la rectificación del nombre ó el paso a otra lista.

Atendidas, á juicio del juez federal, estas reclamaciones y enviadas las listas á los presidentes de comicio, no son discutibles. Uno de los ejemplares se fijará en cada uno de los recintos designados para la elección, y antes que esta empiece, en lugar bien visible y de fácil acceso.

Art. 35. El día señalado para la elección por la convocatoria respectiva, los presidentes de comicio ó sus suplentes, se apersonarán en el local de autómata designado por el Poder ejecutivo, á las 10 a. m., y cumplido lo dispuesto en la última parte del artículo anterior y en los artículos 41 y 43 de esta ley, verificada por la partida cívica la identidad de los apoderados presentes á que se refieren las procuraciones mencionadas en el artículo 10 de la misma, y corroboraos de que la urna, remitida por la junta escrutadora, está vacía y tiene intactos sus sellos, la colocará en la habitación á que se refiere el artículo 41 de esta ley igualmente, y declararán abierto el acto electoral, labrando un acta en los siguientes términos:

«En el día...., á las 10 a. m., y en virtud de la convocatoria de.... para la elección de.... y en presencia de don N. N. y don N. N., apoderados de los candidatos don N. N. y don N. N., el subscripto, presidente de comicio, declara abierto el acto electoral en la mesa número...., correspondiente al colegio electoral de....»

Esta acta será firmada por el presidente del comicio y los apoderados de los candidatos. Si los apoderados se negasen á firmar ó no hubiese apoderados nombrados, firmará tan solo el presidente, haciendo constar el hecho.

Art. 36. Los presidentes suplentes, designados en los artículos 31 y 60 de esta ley, asistirán al acto electoral para substituir al efectivo en el caso de que éste, por motivos justificados, hubiese estado impedido de asistir á dicho acto ó tuviese que ausentarse de la mesa.

Los apoderados que no se encontraran presentes á la apertura del acto electoral, serán reconocidos al tiempo que lleguen, sin retrotraer ninguna de las operaciones.

Art. 37. Abierto el acto electoral, procederán los electores á presentarse al presidente del comicio, por el orden en que lleguen y de uno en uno dando su nombre y presentando su partida cívica, á fin de comprobar que les corresponde votar en la mesa.

Dentro del recinto del comicio, no podrán aglomerarse más de diez electores que no estén acreditados ante la mesa.

Art. 38. Hecha la comprobación prescripta en el artículo anterior, procederá el presidente á verificar la identidad del elector, oyendo á los apoderados de los candidatos.

En el acto de la elección no se admitirá, de persona alguna, discusión ni observación sobre hechos extraños á ella y respecto del elector

sólo podrán admitirse, y únicamente de los apoderados de los candidatos, las que se refieren á su identidad.

Estas objeciones se limitarán á exponer netamente el caso y de ellas se tomará nota sumaria en la columna de observaciones frente al nombre del elector.

Art. 39. Si la identidad del elector no es impugnada, el presidente del comicio le entregará un sobre abierto y vacío, firmado en el acto por él de su puño y letra y por uno de los apoderados cuando menos, ó por uno de los electores si los apoderados no estuviesen presentes ó se negasen á firmar, ó invitará al elector á pasar á una habitación contigua á depositar su voto.

Art. 40. En el caso de que la identidad del elector sea impugnada por alguno ó algunos de los apoderados de los candidatos, el presidente del comicio anotará en el sobre dicha impugnación, usando las palabras «impugnado por el apoderado (ó apoderados) don N. N. y don N. N.», y en seguida, tomando la impresión digital del elector impugnado en una hoja de papel ad-hoc, escribirá en ella el nombre, número del enrolamiento y eluso á que pertenece el elector, la firmará, y metiéndola en el sobre, lo entregará abierto al mismo elector, invitándolo, como en el artículo anterior, á pasar á la habitación contigua. De esta impugnación se tomará nota en la casilla de observaciones de las listas, á que se refiere el artículo 34 de esta ley.

En el caso de que ninguno de los apoderados de los candidatos quiera firmar el sobre, el presidente del comicio así lo hará constar en el mismo sobre. La negativa del ó de los apoderados impugnados á firmar el sobre del elector impugnado se considerará como anulación de la impugnación, pero bastará que uno solo firme para que subsista.

El elector impugnado, después de haber sufragado, será arrojado á la orden del presidente del comicio ó dará fianza pecuniaria ó personal suficiente á juicio del mismo presidente, que garantice su presentación á los jueces federales en el caso de que la junta escrutadora reconozca fundada la impugnación.

La fianza pecuniaria será de quinientos pesos moneda nacional, de que el presidente del comicio pasará recibo y que quedará en su poder. La personal será dada por un vecino conocido que por escrito se comprometa á presentar al afianzado ó á pagar aquella cantidad, en caso de ser condenado.

El Poder ejecutivo, por intermedio de las juntas escrutadoras, proveerá á los presidentes de comicio de formularios impresos de uno y otro documento y dará las instrucciones necesarias.

Art. 41. La habitación en donde los electores pasan á depositar su voto, no puede tener más que una puerta utilizable, no debe tener ventanas y estará iluminada artificialmente en caso necesario. Al presidente del comicio, incumbe certificarle del cumplimiento de esta disposición y si no fuera posible disponer de una habitación que reúna estas condiciones, el mismo presidente sellará la puerta ó puertas superfluas y las ventanas, en la presencia de dos electores por lo menos, antes de empezar el acto electoral, y no levantará los sellos sino

una vez él terminado. En esta habitación estará la urna para la recepción de votos, cerrada y sellada por la junta escrutadora del distrito, y señalada con el número de la mesa á que corresponde.

Art. 42. Introducido en esta habitación, y cerrada exteriormente la puerta por el presidente del comicio, el elector depositará su boleta de sufragio, retirándose inmediatamente del local donde funciona la mesa.

La boleta será encerrada en el sobre entregado por el presidente del comicio y depositada en la urna receptora. El elector no deberá retirar del sobre la impresión digital en el caso de haber sido impugnada su identidad. Si lo hace, esto hecho constituirá, á los efectos penales, prueba suficiente de la verdad de la impugnación.

Las boletas no contenidas en sobre ó aquellas que estén en un sobre con la nota «impugnadas» y de donde falte la impresión digital, no serán tenidas en cuenta en la operación del escrutinio.

Art. 43. Un cartel con las disposiciones del artículo anterior y del siguiente y de los artículos 50 y 51, en caracteres bien visibles, estará colocado sobre la vía pública, cerca de la puerta de entrada del local en donde se reúnen el acto electoral, de manera que los electores puedan enterarse de dichos artículos antes de entrar á ser identificados. El presidente del comicio cuidará del cumplimiento de esta disposición antes de empezar el acto electoral.

Art. 44. En las elecciones de senadores por la Capital y de presidente y vicepresidente de la Nación, cada elector primario votará por el número de electores calificados que correspondan al distrito.

En las elecciones para diputados nacionales y cuando se trate de elegir uno ó dos, cada elector no podrá dar válidamente su voto sino á un número igual de candidatos. Si se eligieran más de dos, cada elector sólo podrá votar por las dos terceras partes del número á elegir en la elección ocuriente, y en caso de resultar una fracción de ese número, por un candidato más.

Cuando en una boleta se escribieren más nombres que los que corresponden, sólo valdrá el voto para los primeros, en el orden en que estén escritos, hasta completar el número legal. Si no fuese posible determinar ese orden, será nulo el voto en su totalidad.

Art. 45. Pasado un minuto, ó antes si el elector lo pidiera desde adentro, el presidente del comicio abrirá la puerta de la habitación donde se encuentra la urna receptora, y sin entrar él mismo en dicha habitación, hará salir al elector. Acto continuo procederá á anotar, á la vista de los apoderados de los candidatos y del elector mismo, la palabra «votó» en la columna delante del nombre del elector que ha sufragado, en las listas á que se refiere el artículo 34 de esta ley.

Art. 46. Las elecciones no podrán ser interrumpidas, y en caso de serlo por fuerza mayor, se expresará en acta separada el tiempo que haya durado la interrupción y las causas de ella.

Las elecciones terminarán tan sólo cuando hayan votado todos los electores presentes y

nunca antes de las seis en punto de la tarde. Después de haber votado el último elector presente, el presidente del comicio invitará á los apoderados de los candidatos y á los ciudadanos á que se refiere el artículo 49, inciso 2.º, si los hubiere, á pasar á sufragar, y cuando todos lo hayan hecho, uno á uno y en la forma anteriormente prescripta, sufragará él mismo y dará por terminada la elección.

Art. 47. En la sala de entrada y en presencia de todos, cubrirá entonces la urna, en su parte superior, con una hoja de papel fuerte que sellará, firmará y hará firmar por todos los presentes apoderados de los candidatos, con mención de los que se nieguen á hacerlo. Firmará igualmente, ó invitará á los apoderados presentes á que firmen la lista electoral á que se refiere el artículo 34 de esta ley, tachando los nombres de los electores que no hayan comparecido y dejando al pie de ella la anotación, por escrito y en letras, del número de electores que sufragaron en el acto y de las protestas hechas, en los siguientes términos:

«Siendo las... p. m., se declaró terminado el acto electoral de esta mesa, habiendo sufragado en ella.... electores y habiendo protestado de los hechos de esta elección, los apoderados don N. N. y don N. N., según el documento original que se acompaña.»

Art. 48. En seguida encorrará en un sobre esta acta y la entregará personal ó inmediatamente, con la urna conteniendo los votos, á la oficina de correos más próximos, dentro de los límites del departamento ó partido. Todos los documentos á que se refiere el acta antedicha irán contenidos en el mismo sobre que ella, y de su entrega al correo, así como de la entrega de la urna, recibirá el presidente recibo en duplicado, con expresión de la hora en que lo hizo, y enviará uno de los recibos á la junta escrutadora en sobre aparte, entregado en el acto á la misma oficina de correos.

Art. 49. Sin perjuicio de los deberes inherentes á su cargo, relacionados con el orden público general, un empleado de la policía local, se pondrá, con los agentes necesarios, á las órdenes de cada uno de los presidentes de comicio, á objeto de mantener la regularidad y la libertad en el acto electoral y de hacer cumplir sin demora las resoluciones del mismo presidente y velar por el cumplimiento de las disposiciones de los artículos 37, 42, inciso 1.º, 50 y 51 de esta ley.

Donde no hubiese agentes permanentes de policía, el presidente del comicio, por autoridad propia, designará un número suficiente de electores de la serie que voto en su mesa, para los fines antedichos.

Art. 50. Ni en un radio de cincuenta metros del local donde funciona la mesa receptora ni en el local mismo donde la mesa está constituida, se puede entregar ó ofrecer boletas de sufragio á los electores.

Art. 51. Ningún elector puede presentarse en el local en donde funciona la mesa receptora ostentando, aún doblada, su boleta de sufragio. Tan sólo después de haber sido introducido en la habitación en donde se encuentra la urna y de haber sido cerrada exteriormente la puerta, podrá sacar dicha boleta de la pieza de su vestido donde la hubiera guardado.

Art. 52. El presidente del comicio hará re-

tirar á los que no guarden en el acto electoral el comportamiento y moderación debida.

TITULO QUINTO

De las juntas escrutadoras

CAPITULO I

DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS

Art. 53. En cada capital de provincia y en la Capital federal, habrá una junta escrutadora compuesta de cinco miembros, nombrados, sin distinción de partido, por el presidente de la República, entre las personas más espectables de la localidad por sus servicios al Estado, su distinción en las ciencias y en las artes, la respetabilidad de su carácter ó su posición personal.

Art. 54. Todos los partidos políticos, por medio de sus comités distritales, pueden enviar al Poder ejecutivo, hasta el último día del mes de octubre, una lista de cinco nombres de personas que reúnan los requisitos establecidos por el artículo anterior, proponiéndolas para el nombramiento en la junta escrutadora de su distrito respectivo.

Art. 55. El nombramiento de las juntas se hará cada año en el mes de enero y pueden las mismas personas ser nombradas indefinidamente. Estas juntas funcionarán, de acuerdo con esta ley, en todas las elecciones nacionales convocadas en su distrito durante el año de su nombramiento. Los nombramientos serán comunicados á los jueces federales á los efectos del artículo 34 de esta ley.

Art. 56. Un mes antes del día fijado por la convocatoria para el acto electoral, la junta se reunirá en una sala de la casa de correos, elegirá entre sus miembros un presidente y un secretario, y propondrá al Poder ejecutivo el nombramiento de los auxiliares y escribientes que crea necesarios y fijará la hora de sus reuniones ulteriores, haciéndola conocer del público por medio de los diarios.

Art. 57. Con la mayor brevedad, el Poder ejecutivo hará los nombramientos antedichos, y al mismo tiempo que comunicará á las juntas escrutadoras el nombramiento de los presidentes de comicio y la distribución y ubicación de las mesas receptoras, nombrará peritos dactilógrafos para que ejerzan sus funciones cerca de estas juntas, en los casos provistos por esta ley y después que cada cual haya prestado juramento, en manos del presidente de la junta, de ejercer fielmente su cargo.

Entregará asimismo el Poder ejecutivo, á las mismas juntas, las fojas personales de los ciudadanos enrolados en el distrito electoral respectivo, y los formularios, sobres, papeles especiales, sellos y urnas receptoras que las juntas deben distribuir á los presidentes de comicio.

Art. 58. En los primeros días de sus reuniones, las juntas procederán á mandar imprimir y fijar los cartales á que se refiere el artículo 30 de esta ley en la forma prescripta por el mismo, y á distribuir entre los presidentes de comicio

todos los útiles recibidos del Poder ejecutivo, menos las urnas.

Estas deberán ser entregadas á las mesas rurales en la víspera del día fijado por la convocatoria para el acto electoral, y en la capital del distrito en la mañana misma, antes de la hora fijada para el comienzo del mismo acto. Las urnas se entregarán cerradas y selladas convenientemente, quedando las llaves en poder de las juntas.

Art. 59. A los efectos del artículo 10 de esta ley, la junta fijará las horas convenientes para la recepción de las procuraciones de los candidatos, y distribuirá después, en el plazo fijado por aquel artículo, esas mismas procuraciones.

Art. 60. Hasta tres días antes del fijado por la convocatoria para el acto electoral, la junta escrutadora nombrará para cada mesa un segundo presidente suplente que reúna todas las condiciones exigidas por el artículo 31 para el nombramiento de presidente de comicio, este funcionario deberá pertenecer precisamente á la serie sufragante en la mesa cerca de la cual se le acredita, aunque no sea contribuyente territorial.

CAPITULO II

DEL ESCRUTINIO

Art. 61. En sesión pública, la junta escrutadora, reunida en el local indicado, al día siguiente al del acto electoral, cualquiera sea su objeto, y continuando sus trabajos en tantos otros días cuantos sean necesarios á la rápida ejecución de las operaciones de este capítulo, procederá:

- 1.° A verificar si sus sellos y los de los presidentes de comicio están intactos en las urnas que se han recibido;
- 2.° Si cada una viene debidamente acompañada por los documentos á que se refiere el artículo 48 de esta ley;
- 3.° A abrir las urnas recibidas y comparar el número de los sobres contenidos en ellas, con la declaración del número de sufragantes hecha por el presidente del comicio respectivo al pie de la lista electoral de su mesa, según lo dispuesto en el artículo 47 de la misma;
- 4.° A comparar la hora en que, según el acta, se terminó el acto electoral con la de la entrega de la urna á la oficina de correos;
- 5.° A verificar, al final de sus trabajos, si se recibieron tantas urnas cuantas las mesas del distrito.

A todas estas operaciones tienen el derecho de asistir los candidatos ó uno de sus apoderados, al solo objeto de fiscalizarlas en conformidad con esta ley, siempre que varios candidatos hayan sido proclamados en una sola lista, deberán, colectivamente, nombrar un solo apoderado cerca de la junta.

Estas procuraciones serán hechas en la forma indicada y en el tiempo prescripto por el artículo 10 de esta ley.

Art. 62. Si los sellos no están intactos, ó falta alguna urna, ó no viene debidamente acompañada por los documentos respectivos, ó el número de sobres no corresponde al de la declaración del presidente del comicio, la junta escrutadora levantará acta de estos hechos y declarará anulada la votación de la mesa respectiva, pasando los antecedentes al fiscal federal para los efectos penales ordenados por esta ley, y dando cuenta de ello al ministerio del interior para que haga activar los juicios.

Art. 63. Del tiempo mediado entre el final del acto electoral y la entrega de la urna en la oficina de correos, se tomará nota especial que, consignada en el acta general, pasará al Congreso como antecedente, para discusión de la elección, si la hubiera.

Art. 64. Pasará después la junta al escrutinio de las boletas contenidas en cada urna, siguiendo en él lo dispuesto en los artículos 42, inciso 3.°, y 44, inciso 1.°, de esta ley. El presidente leerá en alta voz las boletas, que extraerá una á una de la urna, y poniéndolas de manifiesto á los otros miembros de la junta, candidatos ó sus apoderados, que confrontarán el número de ellas con el de votantes anotados en las listas. Las boletas no inteligibles, las que no contengan nombres propios de personas ó estuviesen escritos varios cuyo orden no puede determinarse, se considerarán en blanco. Si algún miembro de la junta, candidato proclamado ó apoderado, tuviese duda sobre el contenido de una boleta leída por el presidente, podrá pedir en el acto y deberá concedérsele que la examine. En los casos de falta de ortografía, leyes diferentes de nombres y apellidos, inversión ó supresión de algunos de éstos, se decidirá en sentido favorable á la validez del voto y á su aplicación en favor de candidato conocido, cuando no figure en la elección otro con quien pueda confundirse. Si sobre esto ó sobre la inteligencia de la boleta no hubiere desde luego unanimidad en la junta, se reservará para la terminación del escrutinio la decisión de la duda, y entones se hará por mayoría.

La operación empezará siempre por los sobres que tengan la nota "impugnado". De ellos se retirará la impresión digital del elector y será entregada á los peritos dactilógrafos para que, después de compararla con la existente en la foja personal del elector impugnado, declaren sobre la identidad. Si ésta no resultare probada, el voto no será tomado en cuenta en el cómputo; si resultare probada, el voto será tomado en cuenta y la junta ordenará al presidente de comicio la inmediata cancelación de la fianza del elector impugnado, ó su libertad, en caso de arresto. Tanto en un caso como en el otro, los antecedentes se pasarán al fiscal federal para que sea exigida la responsabilidad al elector fraudulento ó al falso impugnador.

Art. 65. Hecha la suma general de todos los votos del distrito, en relación á cada uno, de los sufragados, preguntará el presidente si hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio, y no habiéndose hecho ó después de resuelta por la mayoría de la junta las que se presenten, anunciará en alta voz su resultado, proclamando aquellos candidatos que á pluralidad de sufragios hayan sido elegidos, en el número que al distrito corresponde elegir.

En seguida se quemarán, á presencia de los

concurrentes, las boletas extraídas de las urnas, con excepción de aquellas á que se hubiese negado validez ó que hubiesen sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán todas al acta á que se refiere el artículo siguiente, rubricadas por los miembros de la junta y por los candidatos ó apoderados que quieran hacerlo.

Art. 66. De todos los actos de escrutinio se levantará un acta general, firmada por el presidente de la junta y el secretario respectivo, que, acompañando las actas de los diversos accidentes previstos en el artículo anterior, las boletas á que él se refiere y las actas, listas y protestas enviadas por cada una de las mesas del distrito, será remitida en paquete sellado y lacrado al presidente de la Cámara de diputados, al de la Cámara de senadores ó al Congreso, según el caso. En dicha acta la junta expresará su opinión fundada sobre la validez ó nulidad de la elección. A cada uno de los electos se dará un duplicado de la susodicha acta general, para que le sirva de diploma.

Art. 67. Concluidas todas las operaciones antes indicadas, las juntas escrutadoras enviarán á los fiscales federales, para que entablen el proceso correspondiente, los nombres de los electores del distrito que no hayan cumplido el deber impuesto por el artículo 6.° de esta ley.

TITULO SEXTO

Del escrutinio por el Congreso

CAPITULO UNICO

Art. 68. Es nula la elección de un distrito electoral en donde no haya habido elecciones válidas en dos tercios de las mesas receptoras del mismo distrito.

Declarada la nulidad de una elección, la Cámara de diputados ó el Senado comunicará al Poder ejecutivo nacional ó al gobierno de la provincia respectiva, según el caso, dicha anulación, para que se proceda á una nueva convocatoria, de conformidad con esta ley.

Art. 69. En los casos en que *prima facie* pueda parecer delictuosa la demora en la entrega de la urna y documentos, según prescribe el artículo 48 de esta ley, el presidente de la Cámara de diputados, de la Cámara de senadores ó del Congreso, según el caso, pasará los antecedentes al fiscal federal del distrito á que correspondan, á los efectos del enjuiciamiento del culpable.

TITULO SEPTIMO

Prohibiciones y penas

CAPITULO I

DISPOSICIONES PROHIBITIVAS

Art. 70. Queda prohibida la aglomeración de tropas, ó cualquier ostentación de fuerza armada, en el día de la recepción del sufragio.

Sólo los presidentes de comicio podrán tener á su disposición la fuerza policial necesaria para atender al mejor cumplimiento de esta ley.

Las fuerzas nacionales y provinciales, con excepción de la de la policía destinada á guardar el orden, que se encontrasen en la localidad en que tenga lugar la elección, se conservarán acuarteladas durante el tiempo de ella.

Art. 71. Es prohibido á los funcionarios públicos imponer á sus subalternos que se afilien á partidos ó que voten por candidatos determinados.

Art. 72. Es prohibido á los jefes, oficiales ú oficiales superiores de línea y armada y comandantes de la guardia nacional, permanecer en el recinto de las asambleas electorales más tiempo que el necesario para sufragar, como asimismo encabezar grupos de ciudadanos durante la elección, y hacer valer en cualquier momento la influencia de sus cargos para coartar la libertad del sufragio, y asimismo hacer reuniones con el propósito de influir en forma alguna en los actos electorales.

Art. 73. Es prohibido al propietario que habite una casa situada en un radio de una cuadra alrededor de una mesa receptora, ó á su inquilino, el admitir reunión de electores, ni depósito de urnas, durante las horas de la elección. Si la casa fuese tomada á viva fuerza, deberá el propietario ó inquilino dar aviso inmediatamente á la autoridad policial.

Art. 74. Durante el día del comicio, hasta pasada una hora de la clausura del mismo, no será permitido abrir abiertas las casas destinadas á expendio de bebidas alcohólicas de cualquier clase.

Art. 75. Es prohibido á los electores el uso de banderas, divisas ú otros distintivos, durante todo el día de la elección y las noches anterior y siguiente al mismo.

CAPÍTULO II

VIOLACIONES DE LA LEY ELECTORAL

Art. 76. Como violación contra el ejercicio del sufragio toda persona particular ó pública que, por hechos ú omisiones, y de un modo directo ó indirecto, impida ó contribuya á impedir que las operaciones electorales se realicen con arreglo á la Constitución y á la presente ley. La intención delictuosa se presume siempre en las violaciones de las leyes electorales.

Art. 77. Será culpable del delito previsto y penado por el artículo 281, primera parte, del Código penal, todo funcionario que intervenga en la confección de las listas á que se refiere el artículo 34 de esta ley, que en cualquier forma falsifique, adultere, destruya, substraiga ó modifique, antes, durante ó después de la elección, ó de la formación de las listas antedichas, actas ó documentos electorales. Las personas que sin ejercer cargo legal cooperen, concurran ó faciliten la falsificación, adulteración, destrucción, substracción ó modificación de dichos documentos, sufrirán la pena establecida en el segundo párrafo del artículo citado.

El juicio sobre estos delitos será absolutamente independiente de la aprobación ó desaprobación del acto electoral por las cámaras del Congreso.

Art. 78. Impiden el libre ejercicio del sufragio y serán por ello penados:

- 1.º Con tres meses de arresto, los que hicieren uso de banderas, divisas ú otros distintivos, durante el día de la elección y las noches anterior y siguiente;
- 2.º Con cuatro meses de arresto, los que propongan vender ó vendan votos; con seis meses de arresto, los que propongan comprar ó compren votos;
- 3.º Con seis meses de arresto, los que pretendan votar ó voten con nombre supuesto;
- 4.º Con la misma pena, los que con dicerios, amenazas, injurias ó cualquier otro género de demostraciones violentas, intentasen coartar la voluntad del sufragante;
- 5.º También con la misma pena, los dueños de las casas en que se expendan bebidas, si burlasen la prohibición del artículo 74;
- 6.º Con la misma pena, los que con cualquier ardid, engaño ó seducción, sustraerán al elector durante las horas del comicio, impidiéndole dar su voto; con ocho meses, si para ello usaren de violencia;
- 7.º Con un año de prisión, los dueños ó inquilinos principales de las casas á que se refiere el artículo 73, si no diesen aviso á la autoridad al conocer el hecho;
- 8.º Con dos años de prisión, los que detuviesen, demorasen ó estorbasen, por cualquier medio, á los correos, mensajeros, chusqueros ó agentes encargados de la conducción de papeles de cualquiera de las autoridades encargadas de la ejecución de esta ley.

Art. 79. Serán penados con prisión de un año á diez y ocho meses, los particulares que realicen los siguientes hechos:

- 1.º El secuestro de un elector de senadores ó de presidente ó vicepresidente de la República, y el de los demás funcionarios á quienes esta ley encomienda los actos preparatorios y ejecutivos de las elecciones, privándolos del ejercicio de sus funciones;
- 2.º La promoción de desórdenes ó disputas que tengan por objeto suspender la votación por más de diez minutos ó impedirla por completo;
- 3.º El apoderarse de casas situadas dentro de un radio de una cuadra alrededor de un recinto del comicio, como lo prevé el artículo 73.

Art. 80. Serán igualmente penados con prisión de un año á diez y ocho meses, los funcionarios públicos que, en violación de esta ley, contribuyan á uno de los actos ó á una de las omisiones siguientes:

- 1.º A que las listas electorales, ya preparatorias, ya definitivas, no sean formadas con exactitud ó no permanezcan expuestas al público por el tiempo y en los parajes prescritos;

- 2.º A todo cambio de días, horas ó lugares preestablecidos para las distintas formalidades de la ley;
- 3.º A toda práctica fraudulenta de las operaciones de formación de las listas y demás documentos y actas escritas;
- 4.º A que las actas, fórmulas ó informes de cualquier clase que la ley prevé, no sean redactados en su forma legal; ó sean firmados ó transmitidos en tiempo oportuno ó por las personas que deban subscribirlos;
- 5.º A proclamar un falso resultado de una votación y hacer cualquiera otra declaración falsa ú otro hecho que importa ocultar la verdad en el curso de las operaciones electorales.

Art. 81. Se hallan en la misma categoría del artículo anterior, é incurrirán en la multa de quinientos pesos moneda nacional, aplicados al fondo de escuelas de la capital ó de la provincia á que pertenezca el multado, los miembros del Congreso que sin causa justificada faltasen á la sesión á que se refiere el artículo 23.

Art. 82. Están también en la misma categoría de los artículos anteriores y sujetos á la penalidad de un año á diez y ocho meses de prisión, los autores y cooperadores de los siguientes hechos:

- 1.º El presidente de comicio que, debiendo prestar amparo á un elector, según lo dispuesto en el artículo 4.º, no lo hiciera;
- 2.º El empleado ó agente de policía que, estando á las órdenes del presidente de comicio, no lo obedeciere;
- 3.º El que debiendo recibir ó conducir listas y actas de una elección, y los que están encargados de su conservación y custodia, quebrantasen los sellos ó rompiesen los sobres que los contengan;
- 4.º Los empleados civiles, militares ó policiales que interviniesen para dejar sin efecto las disposiciones de los funcionarios electorales, y los que teniendo á sus órdenes fuerza armada, hiciesen reuniones para influir en las elecciones;
- 5.º Los que desempeñando alguna autoridad privasen, por cualquier otro medio ó recurso, de la libertad personal á un elector, impidiéndole dar su voto;
- 6.º Todos los funcionarios creados por esta ley, cuando no concurran al ejercicio de su mandato, ó injustificadamente lo abandonen después de entrar en él, ó impidiesen ó influyesen para que otros no cumplan con su deber;
- 7.º Los autores de intimidación ó cohecho. Consistiendo la primera en actos que hayan debido infundir temor de daños y perjuicios á un espíritu de ordinaria firmeza, y el segundo en el pago, ó promesa de pago, de algo apreciable en dinero, y por parte del que desempeña funciones públicas, en la promesa de dar ó de conservar un empleo.

Art. 83. Serán penados con arresto de seis meses á un año:

- 1.º Los miembros de la justicia federal y local de la Capital y de las provincias, comprendidos los jueces de paz, asesores, fiscales, defensores y secretarios; los empleados y funcionarios de policía de la Capital y de las provincias y los empleados del Registro civil dependientes del gobierno de la Nación y de las provincias de cualquier jerarquía que sean, que directa ó indirectamente tomen participación política en favor de partido ó candidato determinado, ó que durante las luchas ó en cualquier tiempo hagan un acto de adhesión ostensible ó de oposición manifiesta con relación á los partidos políticos existentes ó en formación, salvo el deber de emitir su voto.
- 2.º Los funcionarios públicos, nacionales ó provinciales, que tengan bajo su dependencia, como jefes de repartición ú oficina, uno ó más empleados y los induzcan á adherir á candidatos ó partidos determinados.

Art. 84. El elector que sin causa legítima dejase de emitir su voto en cualquier elección efectuada en su distrito, será penado:

- 1.º Con la publicación de su nombre como censura por haber dejado de cumplir su deber civil, y si fuera empleado público, con anotación de ello en el registro nacional de empleados, para que no se le acuerde ascenso ni perciba aumento de sueldo hasta que vote en nueva elección;
- 2.º Con una multa equivalente al veinticinco por ciento del importe total de las contribuciones ó impuestos de cualquier denominación que pague á la Nación ó á las provincias.

Si el elector no pague contribución ni impuesto alguno y tampoco fuese empleado público, sufrirá una multa de cincuenta á doscientos pesos, que se doblará en cada reincidencia.

Sin perjuicio de la multa que pudiera corresponderle, si el elector percibiese sueldo ó haberes del Estado, provincia ó municipio, perderá durante el tiempo que corra hasta una nueva elección en la cual vote, uno por ciento de ellos, que se retendrá al hacerse cada entrega, transfiriéndose esta porción al Consejo de educación del distrito respectivo.

En caso de reincidencia, además de las penas anteriores, el elector quedará inhabilitado hasta que tome parte en otra elección, para los cargos públicos electivos y para ser nombrado para cualquier cargo dependiente del gobierno nacional, gobiernos de provincias ó de los municipios.

Art. 85. No incurrirán en dicha responsabilidad los electores analfabetos ó los que dejaren de votar por residir á más de diez kilómetros de la mesa ó por cambio de domicilio dentro del término fijado por el artículo 7.º, inciso 2.º, de la ley número 8130. Tampoco incurrirán en ella los impedidos por enfermedad, por ausencia fuera del país, ó, con causa justificada, den-

tro del país ó por otra circunstancia de igual entidad ó análoga á las anteriores.

Art. 86. El ó los apoderados de candidatos que hayan hecho una falsa impugnación de identidad contra algún elector, serán penados con una multa de quinientos pesos moneda nacional cada uno, á favor del elector impugnado.

Del pago de esta ó estas multas será solidariamente responsable, con cada uno de ellos, el candidato ó grupo de candidatos que lo ó los hubiere acreditado. El interesado puede hacer efectivo el cobro de la multa por vía de apremio ante la justicia federal.

Art. 87. El ciudadano que, designado por el presidente del comicio, en virtud del artículo 49, para mantener la regularidad y libertad del acto electoral no lo obediere ó se retirare sin motivo justificando antes de terminar dicho acto, será penado con una multa de veinte pesos moneda nacional.

CAPITULO III

DE LOS JUICIOS DE LA MATERIA ELECTORAL

Art. 88. Todos los juicios motivados por infracciones á esta ley serán substanciados ante los juzgados federales con intervención del agente fiscal.

Cuando recaiga contra funcionarios que por la Constitución nacional ó por las constituciones provinciales gocen de inmunidades para estar en juicio, ésto no podrá llevarse adelante sin que previamente se hayan levantado las inmunidades por quien corresponda.

Art. 89. Todos los juicios que se sustancien ante cualquier autoridad ó tribunal singular ó colegiado, por infracciones á esta ley ó en sostenimiento, defensa ó garantía del ejercicio del sufragio serán breves y sumarios; las partes deberán concurrir al comparendo á que se les cite, provistas de toda la prueba que deberá producir; no son admisibles en ellos cuestiones previas, pues todas deben ventilarse y quedar resueltas en un solo y mismo acto. Sin embargo, en ningún caso se omitirá la citación y audiencia del acusado y tales omisiones anularán todo lo que se obrase en consecuencia.

Art. 90. Todas las faltas y delitos electorales podrán ser acusados por cualquier elector, con tal que pertenezca al mismo distrito electoral, sin que el demandante esté obligado á dar fianza ni caución alguna, sin perjuicio de las acciones y derechos del acusado, si la acusación es maliciosa.

Art. 91. Las reglas á observar en estos juicios son las siguientes:

- 1.ª Presentada la acusación, el tribunal citará á juicio verbal y actuado al acusador y al acusado, dentro de los diez días después de la citación;
- 2.ª Si resultase necesaria la prueba, se podrá fijar un término, como base, de tres días, durante los cuales deberán solicitarse todas las diligencias conducentes á producirla;
- 3.ª Los jueces, á petición de parte, podrán solicitar de quien corresponda, la remisión del documento que se denuncie como

falsificando ó adulterado, á los efectos del juicio, y vencidos los tres días fijados en el inciso anterior, y recibido el documento ó documentos pedidos, se citarán inmediatamente á nueva audiencia en la cual se examinarán testigos públicamente, se oirá la acusación y la defensa, y levantándose acta de todo, se citará en el mismo acto á las partes para sentencia, la que se dictará dentro de las veintenta y ocho horas siguientes del comparendo, previa vista del agente fiscal;

- 4.ª El retardo de justicia, en estos casos, será penado con multa de doscientos á quinientos pesos;
- 5.ª El procedimiento de las causas electorales continuará aunque el querellante desista, y la sentencia que se diere producirá ejecutoria aunque se dicte en rebeldía del acusado.

Art. 92. Toda sentencia definitiva será apelable para ante las cámaras federales de apelación, de los fallos de los jueces de sección, salvo los recursos establecidos por el artículo 14 de la ley de 14 de septiembre de 1873.

Art. 93. A objeto de asegurar la libertad, seguridad ó inmunidad individual ó colectiva de los electores, el juez nacional, en las capitales ó ciudades donde ejerza sus funciones, y los jueces letrados ó de paz, respectivamente, de cada sección ó lugar de comicio, mantendrán abiertas sus oficinas, durante las horas de la elección, para recibir y resolver verbal ó inmediatamente las reclamaciones de los electores que se viesen amenazados ó privados del ejercicio del voto.

A este efecto, el elector por sí ó otro ciudadano en su nombre, por escrito ó verbalmente, podrá denunciar el hecho ante el juez respectivo, y las resoluciones de este funcionario se cumplirán sin más trámite, por medio de la fuerza pública, si fuere necesario.

Art. 94. Cuando no sea posible hacer efectivo el importe de una multa, por falta de recursos del condenado, ésto sufrirá arresto, en razón de un día por cada cinco pesos.

Art. 95. Las multas que por esta ley se establecen, serán destinadas para el fomento de la educación común de los respectivos distritos.

TITULO OCTAVO

Disposiciones generales

CAPITULO UNICO

Art. 96. Para tomar posesión de todo destino público, será requisito indispensable en los mayores de diez y ocho años exhibir la certificación, por la junta escrutadora competente, de haber cumplido el deber del sufragio en la última elección nacional verificada en su distrito respectivo ó certificación, por el juez federal competente, de no ser elector, ó de estar exento de obligación de votar ó de haber justificado la omisión de voto ante el mismo juez.

Art. 97. Las juntas escrutadoras y los jueces federales expedirán las certificaciones de

esta clase que le fueren pedidas, con referencia á las listas de votantes y á las pruebas presentadas ó antecedentes de pública notoriedad en sus respectivos casos.

Art. 98. El Poder ejecutivo determinará por decreto los formularios y modelos de todos los útiles necesarios para el cumplimiento de esta ley.

Art. 99. Todas las remisiones de los jueces federales, juntas escrutadoras y jueces de comicio, serán hechas por medio del servicio de correos. Su dirección organizará un servicio especial para el cumplimiento de todas las obligaciones que esta ley le atribuye, llevando cuenta de los gastos que este servicio origine, para imputárselos á la misma ley.

Art. 100. Queda autorizado el Poder ejecutivo para hacer en todo tiempo, de rentas generales, los gastos que demande la ejecución de la presente ley.

Art. 101. Deróganse todas las leyes electorales anteriores á la presente.

Art. 102. Comuníquese al Poder ejecutivo, etc.

INDALECIO GÓMEZ.

Buenos Aires, agosto 11 de 1911.

Honorable Congreso:

Sancionadas por vuestra honorabilidad las leyes de enrolamiento militar y padrón electoral que el Poder ejecutivo tuvo ocasión de proponer al Congreso, la Nación se encontrará, dentro de algunos meses, con un censo electoral completo y cada uno de los ciudadanos inscriptos en él tendrán en su mano un título cívico que le permitirá el acceso á los comicios en condiciones de no hollar junto á su propio voto ó en frente de él sino á otros electores con títulos igualmente auténticos y depurados.

Garantizar el sufragio y crear el sufragante fué uno de los enunciados de mi programa presidencial.

Y á esta segunda parte corresponde el proyecto que ahora tengo ocasión de presentar á vuestra honorabilidad, requiriendo en la ley la sanción del voto obligatorio y estableciendo en los escrutinios electorales una adaptación del sistema denominado de lista incompleta.

No pretende el Poder ejecutivo haber descubierto cosa alguna, ni censo son ya posibles los descubrimientos en tales materias. Lo único factible es la adaptación de lo ya conocido á las necesidades y á las exigencias, gratas ó ingratas, de la situación en que se ejerce la función de gobierno.

La colectividad que en sus instituciones arma al ciudadano con el derecho del voto, tiene á su vez el derecho de exigirle que no deje inactiva la facultad de votar; pues de su buen ó mal ejercicio depende el bien inapreciable de la administración del estado. Sin la creencia egoísta de los más, jamás llegarían las minorías, que se agitan en el seno de todas las naciones, á poner en serios peligros el orden institucional ó político, y aún los fundamentos del orden social. La concepción, para proceer al sufragio, no puede, sin embargo, exceder de cierto límite, supuesto que no votar no es propiamente un delito, aunque sea una falta de civismo.

Mientras la Constitución nacional no sea reformada, tampoco es posible pasar directamente y de una vez á la representación de las minorías. Dentro del sistema electoral á pluralidad de sufragios impuestos por la Constitución, el Poder ejecutivo ha creído que cabe á título de ensayo preparatorio de la reforma definitiva, el sistema de lista incompleta que se comprende en el proyecto adjunto. En todo caso, los sistemas de representación de las minorías exigen, para su buen funcionamiento, una sólida organización y una perfecta disciplina en los partidos políticos, de las cuales estamos aun muy distantes, y para las que puede ser una preparación el ensayo leal del sistema que en el proyecto se propone.

Para la efectividad de ese ensayo, contiene el proyecto otra serie de disposiciones sobre la constitución de las mesas, forma de emitir el voto y manera de hacerse los escrutinios, que á juicio del Poder ejecutivo pueden ser las más eficaces en el estado actual de nuestras costumbres políticas.

Opina el Poder ejecutivo que, por el momento al menos, el proyecto acompañado garantiza la libertad y pureza del sufragio, substrayéndolo al influjo de los intereses y pasiones locales, no siempre bien inspirados, que han desnaturalizado tantas veces los mejores intentos de reforma.

Como quiera que sea, el Poder ejecutivo ruega al honorable Congreso no aparte de su consideración, que las leyes electorales son solamente la combinación de aquellos medios que en determinado momento pueden ser aconsejados como convenientes y oportunos para asegurar la libertad personal del elector, la emisión consiguiente del voto y la perfecta verdad del escrutinio que condensa la voluntad popular.

Cada día tiene su tarea y su necesidad. Satisfechos los de hoy, los poderes públicos de la Nación Argentina subrán también satisfacer los anhelos del mañana bajo la inspiración del más sano patriotismo.

Dios guarde á vuestra honorabilidad.

ROQUE SÁENZ PEÑA.

INDALECIO GÓMEZ.

Sr. Presidente—Está en discusión.

Sr. Fonrouge—Pido la palabra.

La comisión de negocios constitucionales ha prestado al despacho de la ley electoral toda la atención que su importancia requiere. Ha celebrado innumerables sesiones con presencia del señor ministro del interior, invitado á concurrir á su seno, sobre todo en la deliberación de las partes más fundamentales del asunto, y á todos los señores diputados que han deseado expresar al respecto sus ideas. En este sentido ha recibido el auxilio de la ilustración, de la experiencia y de la sabiduría de distinguidos colegas que han podido por ese medio hacerle más fácil su tarea.

Es, fuera de duda, señor presidente, que después de la sanción que rige ahora el padrón electoral, sistema realmente novedoso en la República, y que se amolda á su idiosincrasia lo mismo que á la índole de sus instituciones,—que arranca la calidad del elector de la circunstancia indispensable de ser soldado de la República,—todos los medios fraudulentos de que han echado mano los partidos en sus apasionamientos, deben necesariamente desaparecer; porque para simular la calidad de elector, sería necesario cometer un delito del orden militar, lo que cambia el aspecto del asunto y aleja, por consiguiente, toda sospecha de que en lo sucesivo los electores no formen realmente el número y el núcleo de los ciudadanos en que reside la soberanía para elegir los poderes públicos del país.

Por consiguiente, á este padrón corresponde como una consecuencia necesaria, un comicio donde el ciudadano inscripto pueda ejercitar con verdad y con libertad sus derechos políticos.

De eso se ha preocupado la comisión tomando por base el proyecto del Poder ejecutivo; y sin pretensión de ninguna clase, cree que ha conseguido salvar grandes dificultades y llevar á la práctica ese pensamiento, es decir: que el ciudadano pueda ejercitar sus derechos políticos sin ser coartado en ninguna forma y sin los peligros del fraude á que antes estaba expuesto.

Para estos fines, desde luego, ha tenido que apartarse del sistema vigente que ahora se proyecta derogar, alejando, para la formación del padrón, la intervención de toda acción partidista, es decir: que los ciudadanos afiliados á los partidos ya no tendrán en lo sucesivo ninguna función pública que los obligue á ir á desempeñar actos que á veces han podido estar en pugna con sus mismos sentimientos y con sus intereses políticos.

De manera que había en cierta forma en la ley una crueldad inaudita al castigar muchos delitos de orden electoral, desde que se olvidaba un principio indispensable que ha debido tenerse en cuenta: nadie puede ser juez en causa propia. Eso era lo que sucedía en la práctica, y eso es lo que ahora se evitará para lo sucesivo.

El comicio, en adelante, estará for-

mado por un ciudadano que revestirá todos los caracteres de un funcionario público, nombrado por una autoridad insospechable, como es la junta electoral que se proyecta, con calidades que garantizan el éxito en el desempeño de sus funciones, no sólo por razón de la responsabilidad personal que se exige de él, puesto que debe ser contribuyente territorial, sino también por todas las otras condiciones que aseguran en él la conciencia propia del caballero, del ciudadano que en ningún caso y por ninguna circunstancia podría faltar á su deber. Porque, señor presidente, en todos los actos electorales se falta á su deber, y todos más ó menos lo han hecho. El que habla podría acusarse. Lo ha hecho como partidista, pero jamás como funcionario público. Y en este caso, ese presidente de comicio va á ser un funcionario público que revestirá á su alrededor todos los prestigios de la mayor imparcialidad.

Por otra parte, el acto electoral en sí también estará asegurado en cuanto al secreto del voto, que es otra garantía creada en favor del elector, ya aceptada por la ley electoral vigente; garantía que, como he dicho, es en favor del elector y que también tiene por objeto primordial alejar en cuanto sea posible los procedimientos muy conocidos, que más de una vez se han puesto en juego por los partidos políticos para adquirir votos por medio del soborno ó del cohecho. Y en esta forma, como todo aquel que es capaz de traficar con su voto es un individuo sin conciencia, que no puede jamás inspirar confianza á la otra parte contratante, desaparezca la única seguridad que ésta tiene para que el acto ilícito se cumpla, que es el conocimiento previo de la forma cómo va á votar, se aleja en cuanto es posible del acto electoral el soborno y el cohecho.

De manera, pues, que de este punto de vista, la reforma hará más eficaz la ley de lo que es actualmente, puesto que asegura el secreto del voto. Los señores diputados ya conocen el despacho, y habrán podido darse cuenta del mecanismo que asegura con el mayor éxito ese secreto.

Con respecto á las juntas electorales se ha modificado también la ley siempre de acuerdo con el pensamiento que

ha venido presidiendo á todo este sistema de legislación. El pensamiento ha sido: primero, alejar, como he dicho antes, la intervención partidista en todo el mecanismo electoral; segundo, substraer, en cuanto sea posible, la intervención de las autoridades locales de los distritos electorales, á fin de que la elección pueda desenvolverse sin ninguna clase de influencia de las mismas autoridades locales que pudieran perturbarla en alguna forma y que pudieran coartar la libertad del elector.

En este sentido, y respondiendo á este principio, la junta actualmente existente ha sido modificada también, pues es sabido que la constituía, por una parte, el juez federal, el presidente de la legislatura ó del senado de las provincias, y el presidente del superior tribunal de la justicia local.

Consecuente con ese propósito de alejar la intervención de las autoridades locales en lo posible, se proyecta formar la junta en lo sucesivo por medio del presidente de la cámara federal, en los distritos donde existe ésta, el juez federal de sección de ese mismo distrito, y el presidente del superior tribunal de justicia. Esta es la única autoridad local que interviene, y que por la alta investidura que desempeña en la justicia local de las provincias, reunirá seguramente todos los prestigios necesarios para la imparcialidad.

Por otra parte, siempre las autoridades nacionales estarán predominantes en la constitución de esa junta, puesto que el presidente de ella, que debe ser el de la cámara federal, goza de voz y voto en todas las deliberaciones. Con respecto á los distritos donde no existan las cámaras federales, la presidencia será desempeñada por el juez federal é integrada con un conjuer, tomado de la lista que anualmente forme la Suprema corte federal.

Luego, pues, como ve la honorable cámara, no puede ofrecer mayores seguridades de prestigio é imparcialidad, una junta compuesta de esta manera. A ella incumbe munir á los presidentes de comicio de todos los útiles necesarios para el acto electoral, entre otros la urna ó valija que debe también reunir condiciones tales que aseguren completamente su inviolabilidad, á efecto de

que esa valija pase después del acto electoral, por intermedio de los correos de la República, directamente á la junta, con todas las formalidades que se requieren: por la que será abierta, contadas las boletas y practicado el escrutinio.

También el procedimiento para el caso que haya falsos votos será expeditivo y muy claro.

Y finalmente, tiene otro punto que encierra una novedad en el mecanismo electoral, y es que establece que la junta debe pasar á la honorable cámara un informe, dándole su opinión respecto á la legalidad y á la corrección del acto electoral verificado. Es evidente que una vez que esa junta haya practicado el escrutinio y remitido todos los antecedentes á la honorable cámara, que será encargada de hacer el escrutinio que le corresponde, para juzgar de la validez de las elecciones, de acuerdo con los términos de la Constitución, esa opinión asesora reunirá mucho prestigio; de tal manera que las resoluciones de la cámara tendrán que inspirarse siempre en las opiniones emitidas por aquella junta tan selecta é imparcialmente compuesta.

Viene el capítulo de las personalidades. Y allí también se establecen disposiciones precisas, procedimientos claros, breves sumarios, que no causan erogación de ninguna clase á los que se ven en el caso de hacer valer acciones contra los delitos de orden general que se cometan. Y también se establecen penalidades para aquellos que tachen de mala fe,—porque es de suponer que siempre es de mala fe la tacha contra un elector que se presenta munido de su papeleta de enrolamiento,—estableciendo aquellas en que incurrirán, en una forma precisa y sencilla, y determinando no solamente la responsabilidad de los autores inmediatos, sino también la responsabilidad solidaria del fiscal. Todo esto, como se ve, tiene la mayor importancia, para que en todos los casos el acto electoral se lleve á cabo con la mayor legalidad.

Hay otra parte importante del proyecto, que es la que se refiere al voto obligatorio. Sobre este punto debo pensar que ya los señores diputados han de haber meditado detenidamente, dada la

importancia que comporta esta obligación, porque ha dado lugar á grandes debates, á grandes discusiones entre los publicistas, entre todos los hombres que se ocupan de esos asuntos de orden político; y así tenemos, por ejemplo, que mientras la legislación electoral argentina vigente no ha definido, no ha hecho constar en forma precisa cuál es el significado del voto para el ciudadano elector, sin embargo, de los términos de esa legislación se desprende que lo ha considerado como un derecho; y apenas, en una forma imperfecta, como un deber. Y digo en una forma imperfecta, porque al referirse á los deberes del elector, dice que uno de ellos es el de munirse de la partida cívica, y que para desempeñar puestos públicos, etc., etc., será necesario acreditar la posesión de esa partida. Pero no ha pasado de ahí; no ha determinado en una forma precisa é imperativa como lo establece el proyecto que estamos considerando, que terminantemente declara que el sufragio es una obligación del ciudadano. En esto, se ha apartado de algunas legislaciones, entre otras, la recientemente sancionada en España que considera el voto como un derecho y un deber.

La comisión ha creído que debe aceptarse la fórmula que propone el artículo, porque implícitamente el voto es un derecho, desde que siendo el pueblo la fuente de toda soberanía, residiendo en él la facultad, la potestad generadora de los poderes públicos, es evidente que al pueblo no se le puede privar de ese derecho, y como el ciudadano es un componente de ese pueblo, no se le puede impedir el ejercicio del mismo derecho. Pareciera acaso ser esto un pleonismo, porque parece como una concesión de la ley; pero por la ley no debe conceder, como no concede la Constitución cuando se trata de las garantías primordiales del hombre, de aquellas que afectan la libertad, la vida, el honor, el decoro, respecto de las cuales no hace más que declarar. En el caso presente, como se trata de una ley positiva, el hecho de señalarlo podría dejar suponer que mañana el legislador pudiera considerar que no es un derecho. Entonces, la comisión ha creído que debía pasar por alto esta parte y optar sólo por la segunda, es decir, declarar que el voto es una obligación.

No es necesario que yo me detenga mucho, para demostrar la necesidad de que por todos los medios posibles el pueblo elector argentino salga de la apatía cívica en que vive, que se le provoque por todos los medios á la actividad cívica, es decir, á que tome la intervención que le corresponde en la designación de sus autoridades, y que de una vez por todas los poderes públicos de la Nación dejen de tener ese defecto tan grande de que son acusados constantemente: que no representan la voluntad ni la opinión del pueblo.

No basta, pues, que se haya puesto al ciudadano en posesión de su derecho electoral por medio de la papeleta de enrolamiento; no basta que se le entregue el comicio en las condiciones que he enunciado; nada de eso basta: es necesario que la ley obligue al ciudadano á ir al comicio á cumplir con ese deber, estableciendo penalidades que están proyectadas, las únicas que es posible determinar, porque no pueden imponerse otras más que aquellas que guardan una relación entre el daño ocasionado al Estado con la inacción y una indemnización que generalmente ha de gravitar sobre el bolsillo de los que dejan de cumplir con este deber. Proporcionalmente, se aplicará pena corporal á todos aquellos que no tengan los medios exigidos para cumplir con la pena pecuniaria.

Se excluye de estas responsabilidades á más de los valetudinarios y de los incapacitados por enfermedad, á los analfabetos.

Este es un punto que quizás llame la atención de los señores diputados, pero es punto que tiene su razón de ser, porque responde á muchos propósitos.

Desde luego, no puede negarse que flota en el ambiente de todas las sociedades más adelantadas el deseo y la aspiración de que se practique el voto universal, pero el voto universal escalificado, es decir, que no haya ciudadanos que vayan á ejercer su derecho y que no sepan lo que significa ese derecho. Es necesario que el ciudadano tenga del acto que va á cumplir un conocimiento perfecto, y todo eso no lo podrá conseguir mientras no desaparezca su condición de analfabeto, aparte de que una ficción jurídica sienta el principio de que la ley es obligatoria

una vez que se promulga y se da á la publicidad. El analfabeto está en condiciones especiales para no conocer personalmente la ley. Su conocimiento lo tendrá por referencias. Esa ignorancia más bien lo alejará de los actos electorales; y alejándolo, vendrá el interés partidista á contribuir por sus medios á hacer desaparecer los analfabetos, con el mismo interés y la misma eficacia con que en otras épocas, á pesar de las cortapisas que presentaban las leyes, hacía que su entusiasmo de partidista se trocara en el concurso de diez electores...

De manera que si todos esos milagros ha podido llevar á cabo el partidismo, lógico es creer que será posible también esperar que el número de analfabetos desaparezca, porque los mismos interesados en aprovechar esta fuerza de otros tiempos se preocuparán de alejarlos.

Esto es, en síntesis, señor presidente, lo que contiene el proyecto despachado por la comisión.

En la discusión en particular podré contestar detenidamente todas las observaciones que se hagan, debiendo hacer presente que en la impresión se han deslizado algunos errores, que á medida que se vayan considerando los artículos, yo, á nombre de la comisión, haré las rectificaciones que sean necesarias.

Esto por lo que respecta al despacho de la comisión en lo referente á la formación del comicio, de la junta, del escrutinio, de las penalidades y de las disposiciones generales que contiene el proyecto. Ahora, queda una segunda parte, que es, acaso, y sin acaso, la más fundamental de todo el proyecto, la que mayor preocupación ha despertado en toda la opinión. Me refiero al sistema electoral.

Sobre este punto debo dar algunas breves explicaciones con respecto á la situación en que se han encontrado los miembros de la comisión de negocios constitucionales.

Como se habrá podido dar cuenta la honorable cámara, el despacho tiene la firma de todos los señores diputados; pero en la parte referente al sistema hay miembros de la comisión que opinan en favor de la lista completa, es decir, del régimen actual; los hay que

opinan en favor del sistema uninominal, ó sea de la circunscripción, y los hay, en este caso el diputado que habla, que aconseja á la honorable cámara el sistema de la lista incompleta, ó sea el propuesto por el Poder ejecutivo.

No habiendo, pues, un despacho en mayoría, respecto al sistema electoral, y creyendo la comisión que era necesario encaminar los procedimientos para que la consideración de este asunto no sufra retardo y perturbaciones, se ha convenido en que el miembro informante, aprovechando la circunstancia de dar en general los fundamentos del proyecto, exprese los motivos que ha tenido para aconsejar la adopción del sistema de la lista incompleta, reservándose los señores miembros de la comisión, fundar oportunamente sus sistemas, de acuerdo con sus ideas.

Y bien, señor presidente; debo manifestar que este asunto me ha preocupado sobre manera, consultando, más que los libros, porque los libros muy poco pueden decir sobre estos sistemas tan conocidos, el medio, el país donde se va á aplicar; y así como creo que la parte referente al padrón contiene novedades originalísimas, que se van á adaptar perfectamente bien á nuestro medio, y acaso no haya pueblo donde tengan mejor aplicación leyes análogas á éstas, creo también, señor presidente, que tratándose de los sistemas electorales, es necesario estudiar, como digo, el medio, antes que los sistemas, porque los sistemas en sí son conocidos. Nosotros no podemos inventar absolutamente nada á este respecto, y lo que nos toca hacer es ver cuál de los sistemas es el que mejor pueda adaptarse á nuestro país.

Dos son los sistemas que se han conocido en la República: uno, por su largo ejercicio, que es el de la lista completa, y el otro, el de las circunscripciones. La circunstancia de haber formado parte de la comisión de negocios constitucionales, en las distintas épocas en que se han tratado estos dos sistemas, y de haber adherido oportunamente el sistema de las circunscripciones, porque lo creí bueno mientras la experiencia no demostrase lo contrario, hizo que cuando se trató el asunto, subscribiera el despacho aconsejando la circunscripción. Pero hoy, creo, señor presidente,

que la experiencia, que es la madre de la ciencia, nos ha demostrado todos los inconvenientes que ese sistema comporta, y si uno se detiene en el estudio de la materia, se da cuenta de que es un error creer que sea este un sistema que pueda dar representación a las minorías. El sistema de la circunscripción lo que hace únicamente, es subdividir el distrito, es decir, de uno hacer 8, 10, 15, 20, según la importancia de la población; pero allí, siempre está dominando la pluralidad, porque no se puede decir con razón que en los distritos se alberguen los núcleos de opinión: éstos están diseminados. Lo que forman núcleos son las opiniones; de manera entonces, que en los distritos en realidad lo que impera es una mayoría, y las minorías diseminadas en todos los distritos que forman núcleo de opinión, en realidad se quedan sin representación. Luego entonces, argumentar en el sentido de que la circunscripción permite la representación de las minorías, creo sinceramente que es un error. Es un sistema de pluralidad como el de la lista completa.

Pero he observado otros inconvenientes en la práctica, que después los he encontrado en alguna cita que me permitirá hacer oportunamente.

El sistema de la circunscripción en países como el nuestro, tiene muchísimos inconvenientes. Desde luego, el más grande de todos es el de que en vez de propender a la formación de los partidos, propende a fines contrarios, y si hay partidos con alguna tradición ya bastante debilitada, la circunscripción concluye por disolverlos en absoluto. Pero encuentro otro inconveniente más grave todavía a este sistema, y es que no sólo disuelve los partidos, sino que disuelve las naciones. Disuelve la unidad del estado. Dado un sistema político como el nuestro, el sistema de la circunscripción no puede encuadrarse de ninguna manera en él, máxime si se tiene en cuenta que este sistema no podría nunca gravitar por medio de núcleos en toda la República, sino tan sólo en aquellas provincias que por su riqueza, por su extensión y por su población lo permitan, y donde acaso, como ya es muy notorio, germinan ideas de subdivisión de los partidos, ideas que podrán

tener propósitos generosos, pero que en la práctica y por el momento las considero prematuras, porque si se llega con ellas a formar cuerpos vigorosos, hoy tenderían a formar entidades raquíticas, anémicas, cuando debemos tratar de formar entidades fuertes, puesto que no puede haber una nación bien constituida por este sistema, si no está formada por estados sólidos, robustos, dentro de su gobierno autonómico.

Este sistema de la circunscripción, lo declaro lealmente, no puede aconsejarse por mí, haciendo abstracción de los intereses de la provincia que represento. Por más que soy un diputado del pueblo argentino, no puedo despojarme de esas consideraciones, de esos afectos que le tocan a uno más de cerca, y que son, como es natural, los de la provincia que me ha hecho el honor de traerme al Congreso. Es así que tengo la plena seguridad de que con el régimen electoral que vamos a tener, una vez sancionadas estas leyes, habrá elecciones muy libres en la República, mientras que bajo los auspicios del sistema de la circunscripción, habremos fomentado los localismos, y por consiguiente fomentado los propósitos de división de los estados, cosa que considero todavía prematura.

Esta no es una simple cavilación del diputado que habla. En un libro sobre «Democracia individualista» de Ives Guyot, publicado en 1907, se leen las siguientes palabras, que considero muy pertinentes: «El escrutinio uninominal (se ocupa de este sistema en Francia) hace de cada circunscripción una parcela separada del resto de la nación, en la cual los intereses locales son todo, y el interés general, nada. Rebaja el rol del diputado al de un comisionista, y lo obliga a una especie de «chantage» constante hacia los ministros. Tiene esa consecuencia, que puntualizó elocuentemente Waldeck Rousseau, en su discurso de 19 de marzo de 1885, que motivó el restablecimiento del escrutinio de lista».

Esto dice el escritor nombrado, y no sólo él lo ha dicho, sino que también se me ha ocurrido a mí. Las buenas ideas, aquellas que se fundan en el sano criterio, resultan tan accesibles a todos como la prueba del huevo de Colón:

cualquiera las descubre sin necesidad de profundizarlas. Yo pude ver el experimento de las elecciones por circunscripción en la capital de la República, que se llevó a cabo dentro de la mayor legalidad. Prescindo de toda aquella parte de la elección que todos presenciábamos, que afectó la pureza del sufragio, esto es, la influencia de la venalidad. De eso no quiero hacer argumento. Me hago cargo, simplemente, de esta observación de carácter general: que es un sistema electoral más aplicable dentro de un régimen unitario de gobierno que no dentro del federal que nos hemos dado. Aun dentro del régimen unitario, tendría el inconveniente de levantar dentro de la misma nación esas pequeñas parcelas, como ocasionaría también que los diputados, en vez de atender los intereses más graves del país, se consagrasen tan sólo a propiciar los pequeños intereses de pequeñas comunidades.

No es mi ánimo explayarme sobre este punto, siendo del dominio de todos la crítica que se hace a este sistema electoral. Mi objeto es simplemente el de significar las razones que he tenido para no adherir al sistema de la circunscripción, y es que por experiencia he podido ver que sus resultados son realmente desastrosos. No consulta, por lo demás, los intereses de la Nación.

Con respecto al sistema de lista completa, punto más serio, que se relaciona con las opiniones de los que sostienen que la Constitución nacional lo prescribe con exclusión de todo otro sistema por el cual se quiera dar representación a las minorías, voy a expresar brevemente mi manera de sentir.

Otro autor francés dice que la mejor de las constituciones es aquella que se tiene, a condición de saber servirse de ella. Creo que con este criterio debemos nosotros considerar nuestra Constitución. Nuestra Constitución es la mejor, la más sagrada, un verdadero monumento que debemos cuidar todos y saber servirnos de ella, es decir, con altos fines, con fines patrióticos, con fines grandes. Eso es lo que se llama saber servirse de ella, y no meternos en aparentes contradicciones que en realidad no lo son.

La Constitución es un organismo que a mi juicio, debe interpretarse con el

criterio constitucional y de las necesidades de la época. Y la prueba de que es esto cierto la tenemos en lo siguiente. Estudiemos, por ejemplo, la parte que se refiere a las milicias de las provincias. No hay para qué desconocer que cuando se organizó la Nación bajo la Constitución vigente, todas las provincias tenían sus recelos, se miraban con desconfianza las unas a las otras y en previsión de todos los temores, de todos los peligros de que pudieran ser víctimas tanto una provincia con relación a otra, como las provincias con relación al gobierno central, hicieron reserva expresa de sus milicias. De ahí las disposiciones donde se dice que las milicias son de las provincias, que éstas las organizan, nombran sus oficiales y demás; es decir, una infinidad de disposiciones que significan mantener en favor de las provincias todo el prestigio de sus fuerzas, de su guardia nacional, de sus milicias. Para todas esas eventualidades que ellas, temerosas, creían que podrían volver a ocurrir, han querido mantener sus ejércitos provinciales y por mucho tiempo esa ha sido la tendencia.

Pero, señor presidente, cuando hemos salido de toda esa lucha de organización, cuando todas estas dudas, esz-tas reticencias, estos sentimientos mal entendidos, herencia de nuestras luchas civiles, se fueron poco a poco disipando y surgió el sentimiento grande de la Nación, para ejercer su hegemonía en todo el territorio de la República, a ningún gobernador, a ningún representante se le ocurrió que podía resistir. Cuando surgió la Nación bien constituida, rica, fuerte, próspera y poderosa, que despertaba la emulación de vecinos; cuando se comprendió que era necesario pensar solamente en esa nación grande, todos esos pequeños ejércitos provinciales desaparecieron para entregar a la patria grande lo más predilecto, lo más selecto de su milicia, toda su juventud que hoy constituye la fuerza militar de la República.

Bien, los conscriptos formaban parte de esa milicia, y los conscriptos que es la fuerza activa del país, dependen directamente del presidente de la República y no de los gobiernos de provincia, y a nadie se le ha ocurrido que con ello se han violado las disposiciones de la

Constitución, porque es evidente que lo que ha querido ésta, en primer término, es que exista una nación constituida, fuerte, que no pueda ser invadida por enemigos exteriores y puesta en peligro su integridad en ningún momento.

Si pasamos de esto á otro punto más inferior, más modesto, pero que también reviste su importancia, veremos que el Congreso ha dictado leyes hasta para matar la langosta, para destruir las hormigas, para exterminar las alimañas; en una palabra, todos los enemigos de la riqueza agrícola y ganadera de la República. Eso también ha dado lugar á ciertas manifestaciones sentimentalistas de autonomismo mal entendido.

Ruendo una frase muy oportuna del malogrado doctor Pellegrini, cuando en el Senado, defendiendo esa ley, manifestó que habría que optar entre la destrucción de la langosta y las autonomías, es decir, que era necesario en la época en que se estaba, velar por la riqueza de la República.

Indudablemente, dentro de la índole de la Constitución si se hubiera querido interpretar con la rigidez de otra época, quién sabe cómo habrían recibido en las provincias á un inspector que hubiera ido á matar langosta ó á destruir hormigueros. No le habrían permitido de ninguna manera cometer semejante atentado á la autonomía. Mientras tanto, hoy parece la cosa más natural.

Lo mismo sucede con este asunto relacionado con la representación.

Hay algo que es realmente inconcebible, algo que á mi juicio debe abochornarnos como miembros del Congreso: que un parlamento con toda la tradición gloriosa, con toda la tradición de prestigio, de saber y de patriotismo del parlamento argentino, se encuentre en condiciones distintas á los demás parlamentos del mundo, pues no hay parlamento de nación civilizada en que la oposición, la minoría—llámese como se quiera—no tenga sus bancas, no tome parte en sus deliberaciones.

Esto es realmente triste, porque aquí somos todos hombres que estamos representando un mismo propósito. Quizá pertenezcamos á partidos políticos de filiación distinta, pero fundamentalmente, todos estamos representando el oficialismo.

Estoy temiendo algunas protestas de los señores diputados. Pero me parece que todos estamos representando los oficialismos de las provincias. No quiero hacer un cargo con eso.

Sr. Presidente—Por lo que á la presidencia respecta, se equivoca.

Sr. Estrada—Y con respecto á los diputados por la Capital, también.

Sr. Fonrouge—Ya me había anticipado á decir que esperaba algunas protestas.

Sr. Estrada—Deseo recordar al señor diputado que no todos los diputados representan á las provincias. Están también los diputados por la Capital, que no tiene gobernador.

Sr. Fonrouge—¡Ya sé! Pero también ha habido influencias superiores que en una forma indirecta los han ayudado.

Estoy diciendo la verdad. Y cuando digo que los diputados representan los oficialismos de las provincias, los partidos de gobierno, agrego que el diputado que habla se encuentra en ese caso, y lo tiene á alto honor, porque cree que en la provincia de Buenos Aires el partido conservador es un partido fuerte, es el partido de la mayoría.

No he querido con esto hacer un cargo, y me apresuro á hacer esta declaración: estoy hablando en un sentido doctrinario. (Risas.)

Bien, señor presidente. Es necesario buscar el sistema que armonizando, no con la Constitución... porque afirmo que el sistema que tenga por objeto dar representación, no digo ya á las minorías, á una minoría tan sólo, es un sistema que está dentro del espíritu de la Constitución. Es cierto que ella habla de que los diputados serán elegidos á pluralidad de votos, etc., etc.; pero voy á demostrar, y creo poder hacerlo, que esa es una interpretación completamente equivocada, porque hay una disposición más clara que esa, que es la fuente y que se relaciona con este y otros puntos, y es la del artículo 33, que dice: «Todas las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumeradas; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno».

Ahora bien: ¿podrá negarse que una minoría forma parte del pueblo y que

esa minoría es una parte de la soberanía del pueblo?

No es necesario que la Constitución haya dicho expresamente que las minorías estarán representadas, porque es una declaración implícita comprendida en esta disposición. Si en el pueblo reside la soberanía y la potestad de elegir, en la minoría existe igualmente ese derecho; y ¿cómo puede el Congreso, á pretexto de una disposición que no se opone á ello, negar á las minorías la representación en él, en el recinto de la deliberación de las leyes? ¿Con qué derecho puede hacerlo?

Acaso, simplemente, fundándose en esa disposición y nada más que en esa disposición, que los contrarios interpretan con arreglo á su criterio, á su manera de pensar; pero virtualmente se ve que ella no contradice absolutamente el artículo 33, que es realmente la fuente.

Además, el sistema de la lista incompleta busca también las mayorías; porque sobre eso la Constitución no ha dicho nada; ella no ha establecido la forma y el número de diputados que debe elegirse en cada elección. De manera que la ley, por medio del sistema de la lista incompleta, puede desdoblarse el número de diputados al establecerse, lo que establece en realidad, que dos terceras partes son para una mayoría. De suerte que siempre resulta un sistema de pluralidad. Se adjudica á la primera mayoría dos terceras partes y á la segunda mayoría una tercera parte.

Pero, repito, señor presidente, que si esto pudiera considerarse como una argucia, como un juego de palabras, soy bastante sincero para aceptar que pudiera ser así; sin embargo, sostengo que con arreglo al artículo 33 de la Constitución, no es posible negar á las minorías el derecho de intervenir en las deliberaciones del Congreso por medio de sus representantes, siendo necesario buscar, por consiguiente, un sistema que garantice realmente ese derecho y esa prerrogativa.

Sr. Pera—¿Y donde se eligen tres diputados?

Sr. Fonrouge—Perfectamente; no es aplicable el sistema á ese respecto. Pero voy á anticiparme á contestar al señor diputado que el mismo inconveniente lo vamos á tener en este caso: hay provin-

cias, que con arreglo á su población, eligen mayor número de diputados que otras, y sin embargo, siendo iguales los derechos de todos los electores de la República, el vecino de Jujuy no vota por el mismo número de diputados que vota el vecino de la Capital ó de la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo resuelve ese caso el señor diputado?

Sr. Pera—Haciendo el censo.

Sr. Fonrouge—Sí, haciendo el censo. Pero en la actualidad ¿cómo resuelve esa dificultad? Voy á contestarle: porque en realidad la elección se hace por distrito para comodidad de los electores; pero los diputados representan á todo el cuerpo electoral, es decir, á todo el pueblo de la República; y entonces, por una ficción, el elector que vota en Jujuy por dos diputados, ha votado por el resto de los diputados que se eligen en los demás distritos electorales de la República. Es una ficción, porque la Constitución declara que esos diputados son representantes tanto del elector que se encuentra en la Capital, como de todos los que forman parte del pueblo argentino.

De modo que no es un defecto, como no lo es tampoco el que se insinúa cuando se dice: ¿cómo se va á aplicar el sistema de la lista incompleta donde no se pueda establecer el tercio? Pues, señor, ahí no se aplica, sin perjuicio de que puede ocurrir el caso de que se produzca una vacante y coincida con una elección de dos diputados, por renovación de la cámara: en ese caso podrá aplicarse el tercio.

Por otra parte, el sistema de la lista incompleta, reúne una gran ventaja, que no debemos perder de vista. Es necesario propender, no á la disolución, sino á la formación de partidos; y no digo de partidos de principios, porque quizá sea una felicidad que no los tengamos en la República. Los partidos de principios, se crean en virtud de necesidades. Si aquí no hay las necesidades que determinan la formación de esos partidos, tanto mejor: nos agrupamos alrededor de simpatías, de afectos, de ideales de otro orden, de hombres, porque creemos que ellos van á hacer mejor que otros el bien del país, etc.

En otras partes, hay partidos, es cier-

to. Los hay económicos. Esos son grandes partidos. Pero aquí, que no tenemos divergencia de principios económicos; ¿por qué hemos de formar un partido de ese género? ¿Porque hay dos sistemas, el del libre cambio y el del proteccionismo? Pues nosotros aceptamos las dos opiniones, defendemos tanto el libre cambio como el proteccionismo. ¿Por qué defendemos el proteccionismo? Porque conviene á muchas provincias hermanas que, debido á ese sistema, han logrado su engrandecimiento y bienestar; y nosotros los del litoral, también somos grandes y tenemos de sobra elementos. De manera que á este respecto, no podremos nunca constituir partidos, por esta razón: porque nuestra característica es la generosidad, es la verdadera fraternidad, somos realmente argentinos en todo nuestro territorio y no nos dividen los intereses pecuniarios; nos domina el sentimiento del amor y del cariño.

Partidos religiosos, tampoco se pueden formar, porque nuestra característica es la tolerancia para todas las creencias de acuerdo con nuestra Constitución, y la practicamos en esa forma. Tan es así, tan grande es esta tolerancia, que no hace mucho leía en un diario la transcripción de algunos párrafos en que el representante de una colonia judía en Entre Ríos daba cuenta á sus cofrades de Inglaterra que las tradiciones de esa raza que nunca han desaparecido del pueblo hebreo, en la República Argentina iban borrándose completamente y los hijos de judíos, no son judíos, sino argentinos.

—Un señor diputado se dirige en voz baja al orador, quien agrega:

Sí, señor. Pero son creencias sin odios, sin proyecciones, porque aquí el judío, dentro de sus opiniones, dentro de sus ideas religiosas, es tan estimado, tan respetado, tan querido como cualquier otro. Y esta misma tolerancia, en esa forma generosa, respetuosa para todas las creencias, hace que no haya entre nosotros reacciones. Luego, no puede haber partidos religiosos tampoco.

Queda un partido, sí, el partido socialista.

Ese es un partido que está en formación; es el único; pero fuera de él,

no hay partidos de principios, sino partidos de simpatías, de afectos.

Ahora bien, señor presidente: lo que hay positivamente en toda la República son partidos de oposición, esa es la verdad; hay que ser sinceros, sobre todo cuando se trata de dictar leyes de esta naturaleza, leyes políticas. Lo que hay son partidos de oposición, nada más; y entonces es necesario que esa oposición venga á tomar parte en las deliberaciones del Congreso, en la sanción de las leyes.

Además, no debemos perder nunca el punto de vista de nuestro sistema de organización política. Conviene que las provincias, en cuanto sea posible, manden al Congreso representaciones homogéneas, numerosas, eso mismo que se ha dado en llamar bloque; porque cada provincia tiene su bloque; lo que hay es que por un espíritu de crítica se ha querido hacer el cargo á la representación de Buenos Aires, nada más que porque somos muchos; pero tanto forman bloque los diputados por Jujuy como los por Buenos Aires. (Risas.)

De manera que no debemos perder ese punto de vista: cada provincia debe mandar el mayor número de diputados inspirados en altas ideas referentes al Estado y no á los pequeños lugares, porque así es como se traerán aquí las ideas de orden económico, político, social y todas las que afectan las relaciones entre la Nación y las provincias.

No creo que sea necesario que me detenga á enumerar las ventajas que ofrece el sistema de las oposiciones. Sólo sostengo que es necesario reaccionar contra el sistema actual, que es necesario que en el parlamento argentino estén representadas, no todas las opiniones, porque esto no es posible, porque es una utopía, sino todos los partidos de oposición. Ya el mismo Briand, el gran político francés, alarmado por estas minorías, fué al parlamento francés diciendo que era necesario reaccionar, y sostuvo que era necesario dar representación á las minorías, pero á las grandes minorías, proponiendo el gran sistema científico, el mejor de todos, que es el de la representación proporcional. Aconsejaba Briand que el escrutinio se hiciera tomando como dividiendo el cuerpo electoral y no el número de sufragantes: de manera que

aumentando el dividendo, tiene forzosamente que aumentar el cociente. Y agregaba Briand que la experiencia había demostrado que un parlamento donde hay muchas minorías, es, no un cuerpo legislativo, sino una verdadera turba, que no hace más que alterar la tranquilidad del país y las altas funciones del gobierno.

No puede decirse que es una verdad inconcusa que hay que dar representación á las minorías. No; hay que dar representación á las oposiciones, porque las minorías que se agrupan alrededor de ideas determinadas son infinitas; y entonces, de acuerdo con ese criterio, habría que traer tantas representaciones cuantas fueran las distintas agrupaciones.

Por otra parte, hay que propender á la formación de las grandes minorías, y este sistema tiende á ello, y tiende á ello por esta razón: porque todos los partidos que no tengan ideas avanzadas, todos los partidos que tengan ideas, llamaré equilibradas, que no sean enemigos del orden establecido en toda la humanidad civilizada, que no sean enemigos de la propiedad, todas esas agrupaciones que tienen puntos de contacto porque se relacionan con ideales grandes, que afectan el interés general, tienen motivo de afinidad, y en un momento político dado se unen para constituir, no digo una gran minoría, sino una minoría que va á disputar el triunfo á la mayoría conocida. Luego, el sistema de la lista incompleta tiene esta otra ventaja: la gran ventaja de que propendiendo á simplificar los partidos y á hacerlos grandes, agranda las mayorías y agranda también las minorías.

La lista incompleta, señor presidente, vela, pues, por la integridad, por la homogeneidad, por el conjunto de los intereses que afectan á los estados, y por lo tanto, por lo que se refiere á los intereses de esas minorías.

Ahora se dice que este sistema ofrece inconvenientes en la práctica, porque esos mismos intereses que se quieren servir están expuestos á ser defraudados por las habilidades y artimañas de los partidos fuertes. Es cierto; puede suceder eso y puede no suceder. Puede suceder eso en un país donde no se haya entregado al cuerpo electoral una ley tan perfecta como la que va á regir

á la República. En ese caso, este sistema es hasta peligroso, pues si á una mayoría, en un momento dado se le ocurre desdoblarse, se expone á ser menos que una minoría y á quedarse sin representación.

Pero supongamos que esa mayoría, como una habilidad, quisiera desdoblarse... yo me he preocupado de este punto porque *prima facie* parecía que eso podría ser legítimo, puesto que el desdoblamiento se haría á base de electores, y sería una forma de ganar á las minorías. Pero todos los que se han ocupado de este asunto fustigan, anatematizan ese procedimiento, considerando que la mayoría que se desdobla para ir á desalojar á la minoría, á arrebatar su derecho á la minoría, comete un acto que no es leal; sería, ni más ni menos, que el caso de un individuo que simulando una enseñanza amiga, resultara ser un enemigo que se introduce al campo del adversario traidoramente.

De manera que ese peligro tampoco corren las minorías, porque ningún partido deseará sinceramente, por muchas que sean sus fuerzas, ser considerado desleal. Así es que ese argumento deja de serlo: no lo es absolutamente de ningún punto de vista.

Se hace otro argumento y es el siguiente: que no es posible que una minoría á la que no se le limite el número de sufragantes, pueda obtener el triunfo con un número reducido de votos, y que, entonces, por lo menos debe establecerse un *mínimum*.

Esto mismo no es posible, porque sería conspirar contra el propósito del sistema, contra sus fundamentos. El sistema tiende á consagrar este derecho en las minorías con cualquier número que sea, así como el sistema de la mayoría no exige un *máximum* de votantes para triunfar en una elección válida. Lo único que ha exigido la ley vigente, es que funcionen más de los dos tercios de los comicios, es decir, que si en el distrito han funcionado dos tercios como *mínimum*, la elección será válida: si han funcionado menos de dos tercios, ha habido deserción de los comicios, que es cosa muy distinta; pero no ha exigido un *máximum* de votos, ni hay sistema que exija un número dado de votos, sino simplemente que haya votos; y es sabido que hay muchos

países, como Inglaterra por ejemplo, en que el candidato proclamado resulta electo si no se presenta contendor. De manera que, entonces, ese no es tampoco un argumento, porque, repito, el sistema tiene por objeto dar representación á las minorías, cualquiera que sea su número; como tratándose de las mayorías, cualquiera que sea el número de votos que obtengan, es suficiente para obtener representación.

Estas son, señor presidente, las consideraciones que el diputado que habla ha tenido en cuenta para expedir su dictamen en la forma que lo ha presentado.

Y ahora, para regularizar el procedimiento en la consideración de este asunto, me permitiré proponer que antes de entrar á tratar artículo por artículo, la cámara se ocupe de considerar los sistemas, y que figurando el artículo, que ya he entregado á la secretaría, como artículo primero, sea votado oportunamente es decir, cuando se haya terminado el debate; ó que si fuera rechazado, entren entonces á votarse los artículos de los otros sistemas que propongan los miembros de las minorías.

Con esta exposición deo cumplido mi deber, lamentando no haber podido encontrar mayores fundamentos para ilustrar á la honorable cámara en este asunto tan delicado, como es el del sistema de las elecciones; pero afirmando que creo que hay razones de patriotismo, razones que afectan hasta nuestro buen nombre como nación civilizada, que nos obligan á dar representación aquí á la oposición, porque es necesario que la oposición en lo sucesivo intervenga ineludiblemente en todas las deliberaciones del Congreso argentino!

He dicho. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Avellaneda.—Pido la palabra.

Es sabido, señor presidente, que dentro de una democracia representativa, se gobierna porque se delega, y se delega porque se elige. Es así como un autor ha podido decir que en toda operación electoral hay un acto y un motivo. El acto es la elección; el motivo la delegación.

Si antes de entrar á ocuparnos del régimen electoral á adoptarse nos detuviéramos un momento acerca de la me-

jor forma de hacer la delegación, ya que con la elección son los dos medios naturales de que dispone la sociedad para exteriorizar su soberanía, me permitiría formular cuatro enunciados que bien pudieran servir para los fines de mi exposición. Primero, que en un país como el nuestro el gobierno, en sus poderes electivos, debe emanar exclusivamente de la mayoría. Segundo, que la Constitución no les da representación á las minorías, al menos con la latitud que se pretende. Tercero, que es banal discutir el gobierno de la mayoría, y de las minorías, cuando ni una ni otras gobiernan. Cuarto, que nuestra Constitución, en lo concerniente á la formación de los poderes, debe ser interpretada por nosotros, miembros de un cuerpo político, con un criterio esencialmente restrictivo.

Debe gobernarnos, señor, la mayoría, porque prestando de la doctrina y yendo á la realidad, reconociendo como tenemos que reconocer, que la sociedad es una entidad colectiva, y como tal un conjunto de individuos que bien pueden disentir los unos con los otros, es indudable que el mayor número de voluntades ciudadanas será el que más se acerca al total que constituye la voluntad soberana; porque no es posible suponer que la mayoría esté compuesta por insensatos y perversos, que quieran su propio mal para hacer el mal de todos, sino por ciudadanos inspirados en la razón y en la buena fe que en el mayor número suele ser mejor criterio de verdad, y porque la mayoría constituye también la mayor fuerza. De modo entonces que sus resoluciones si no asentidas por todos, serán acatadas, serán estables, y después de experimentadas serán tal vez definitivas.

Y este argumento de que el mayor número constituye también la mayor fuerza, es muy digno de tenerse en cuenta en sociedades todavía en formación como la nuestra, que se caracterizan por su falta de respeto hacia la autoridad y hacia la ley.

Hay dos medios, decía José Manuel Estrada, de considerar la ley, que es al cabo el símbolo supremo de la autoridad. La ley tiene una fuerza de coacción y tiene también una fuerza de atracción. La obediencia apoyada en el

temor no es suficiente para custodiar su imperio; es menester que la sociedad le tenga adhesión y amor, y que respete en ella ese elemento de moral superior que convierte la obediencia en una forma del deber cívico; y agregaba: esa virtud no es virtud del argentino.

Claro está que sería bueno oponer á la mayoría el contrapeso de la minoría; pero esto no es posible en la República Argentina, que dentro de la inmensidad de su territorio tiene una población electoral que no alcanza siquiera á la cifra de 900.000 ciudadanos, de los cuales, sin exagerar, la mitad son analfabetos y asalariados, obligados dentro de su triste situación á discurrir y opinar como discurren y opinan sus jefes ó patronos.

Hablar, señor presidente, de dar representación á las minorías en un país que tiene provincias que, como Jujuy y La Rioja, eligen cada dos años un diputado, ó que, como Catamarca y San Juan, cuando no eligen dos, eligen uno, es inverosímil, es absurdo, es dejarnos llevar por un espíritu de imitación criticable en el hombre de gobierno: es el prurito de reflejar el suceso extranjero, con menoscabo, en este caso, para la Constitución y sin beneficio para nadie.

Por el escrutinio de lista, que es el sistema de la Constitución, las minorías tienen representación en el supuesto de que concurriendo al comicio tres candidatos, con seis mil, cinco mil, cuatro mil votos, respectivamente, por ejemplo, el primero habrá triunfado contra los otros dos, lo que acusa el triunfo de una minoría dividida. Y este caso no es eventual; se presentará, por el contrario, cada vez que estas mayorías no estén frente á una mayoría absoluta.

Las minorías tienen también representación en el caso de un partido nacional en minoría en la República, que triunfa en una ó algunas de las provincias. En este caso, las minorías estarían también representadas en el Congreso.

De hecho, pues, como observa el profesor Orlando, citado por Posada, la experiencia prueba que se efectúa una especie de compensación, por virtud de la cual el partido que está en minoría en un colegio tiene mayoría en otro, resultando que, de hecho, las minorías están representadas.

Ahora, si lo que se pretende es con-

templar la situación de las minorías para fijarles especialmente una representación, juzgo que esto no puede suceder, porque aparte de la simple pluralidad de sufragios que estudiaremos más adelante, es indudable que, conociendo ó desconociendo los constituyentes las distintas teorías tendientes á dar representación á las ideas económicas, políticas, religiosas, á los intereses, á los gremios, á las poblaciones, á los territorios, etc., llegaron hasta decir que, no obstante establecer que para los efectos electorales las provincias y la Capital serán considerados como distritos de un solo estado, nosotros no representamos á las provincias que nos eligen, que representamos al pueblo, queriendo significar con esto que desde aquí no legislamos para propósitos, intereses ó partidos determinados, que no legislamos para la mayoría ni para la minoría, ni para la aldea ni para la provincia, que legislamos para la Nación.

Tributemos, señor, debida justicia á la previsión, al sentido práctico, á la sabiduría de los congresales del 53, que anticipándose en medio siglo llegaron á sancionar en la Constitución que nos rige el principio difundido como verdad inconcusa por los más reputados tratadistas de la última década. «Los diputados elegidos no son más que el instrumento, el medio por el cual la soberanía es ejercida, y no hay entonces violación de principios, ni injusticia, si ellos pertenecen todos á la mayoría del cuerpo electoral». Esmein.—«Elementos de derecho constitucional, año 1899.»

Digo que es trivial discutir la representación que en el gobierno deben tener las minorías, cuando las mayorías no gobiernan, no por la conocida anécdota del gobernador de Tucumán—no he de ocuparme de ella por ahora—sino porque, como la afirma Assis Brazil en su libro «La Democracia», en definitiva, quien gobierna es la sociedad.

«Hay que distinguir,—dice—en la evolución política el hecho actual del hecho permanente. En el momento, como ciertas decisiones se toman por el mayor número, es claro que la mayoría decide; pero la mayoría que tuvo la facultad de hacer valer su opinión, no tiene el privilegio de ser mayoría. El mayor número estará mañana con opi-

niones que no son las de ella. Así es que quien observa el hecho permanente, esto es, la media de la influencia ejercida por todos los factores políticos, reconocerá sin esfuerzo que las diversas corrientes de ideas se equilibran, y que el principio dominante es algo así como lo que llaman los mecánicos la resultante de las fuerzas. Pretender juzgar del resultado total por la observación de hechos aislados, sería como querer hacerse idea del aspecto de una montaña con la inspección de algunos de los innumerables granos de tierra que la constituyen. El gobierno es de todos y por todos, y no de algunos por el mayor número. Por lo demás, en un sistema de libertad, en que el gobierno y la legislación no ejercen más que una acción limitada, no puede haber mal irreparable en la decisión de las mayorías.

Después de recordarnos que en los pueblos regularmente organizados, todos los poderes, inclusive el de legislar, están limitados por leyes; que esas leyes han sido dictadas á través de muchos años por generaciones distintas; que las opiniones que las inspiraron no fueron voluntarias ni arbitrarias, sino que se formaron en un trabajo de gestación lenta, al que concurren todos los órganos, nos dice que lo que se agita y trabaja dentro de los pueblos es la sociedad activa entera; que el número no es sino el lenguaje de las decisiones; que la mayoría, al gobernar, no hace sino emitir el fruto de todo el ser social, y que para ello no puede prescindir de ningún órgano, so pena de dar á luz un monstruo no viable, como sería el feto que en su gestación no hubiera contado con el concurso de todos los órganos del cuerpo materno.

Agrega,—vuelvo á leer sus palabras:—«La mayoría no tiene esa absoluta libertad de resolver que le atribuyen espíritus superficiales. En primer lugar, tiene que amoldar sus ideas á leyes; después, tiene que evitar el escándalo, tiene que respetar la opinión pública, y preocuparse de la conservación de la propia existencia. Es así como la mayoría que decide y que á los ojos del vulgo parece no tener que consultar sino la propia voluntad, no siempre podrá querer lo que le convenga. El partido

más poderoso en número y aun en legítima influencia, tiene que rendirse ante la evidencia.»

Termina con un cuento al caso, ocurrido en su provincia natal. Lo suprimo por innecesario. Creo que ejemplos como ese pueden multiplicarse hasta donde alcance el recuerdo.

La historia nos dice de muchas guerras y de muchos tratados de paz, declaradas las primeras y firmados los segundos, contra la opinión del partido gobernante porque así lo quería el patriotismo herido ó los sentimientos conservadores de un pueblo.

Nosotros, sin ir más lejos, tenemos el famoso proyecto de la unificación de deudas, fracasado á pesar de haber sido iniciado por el señor presidente de la República, que era al propio tiempo jefe de un partido poderoso, á pesar de haberlo sostenido calurosamente el doctor Pellegrini y de haber sido votado unánimemente y sin la menor discrepancia, por el honorable Senado de la Nación.

Esto basta para probar la veracidad de la tesis sostenida.

La Constitución, señor presidente, debe ser aplicada por lo que dice, no por lo que debiera decir; no se le puede aplicar un criterio acomodaticio, porque serían mayores los peligros que ofreciera que las ventajas que pudiera ocasionar. Y este principio debe aplicarse con tanta más rigidez, en presencia de artículos de tan fácil percepción, que ellos me recuerdan las enseñanzas del aula, de que la Constitución es un conjunto de preceptos tan claros y precisos que se complementan y explican los unos á los otros.

Y el peligro de que hablaba se evidencia más en esta oportunidad en que al amparo de una interpretación excesivamente liberal, trabajados por problemas mirados bajo un punto de vista meramente nacional, vamos á estirar tanto la flexibilidad de nuestro sistema federal hasta el extremo de hacerlo desaparecer.

Es con estas convicciones, señor presidente, que entro á debatir el sistema de lista incompleta ó voto limitado que, iniciado por el Poder ejecutivo, ha merecido la aprobación de un miembro distinguido de la comisión de negocios constitucionales.

Ante todo, quiero presentarlo tal cual yo lo entiendo á la honorable cámara. Manifiesto, desde luego, que no es un sistema, es un mero arbitrio, ideado para dar representación á la minoría—á la minoría—no á las minorías: para darle lo que no le pertenece, lo que no le corresponde, lo que no le da ni la equidad ni la aritmética. Es una limitación que la ley impone á las facultades del votante, para que al no computarse los votos sobre la totalidad de los candidatos de un distrito, pueda dejar un margen, una probabilidad á los candidatos de la primera minoría.

Es una concesión que se otorga, no un derecho que se reconoce.

Para verlo sería necesario esta doble circunstancia, que por lo difícil resulta verdaderamente imposible: primero, que la minoría fuera una sola; segundo, que obtuviera, en relación con la mayoría, para cada candidato que haga triunfar, un tercio del número de votantes.

Como lo dice un autor, por este sistema, el voto del ciudadano no es un voto, es menos de un voto, es una fracción de voto, es un voto incompleto.

¡Cosa curiosa, señor presidente! El Poder ejecutivo persigue la verdad del sufragio, la libertad electoral, y para lograrlo empieza por ejercer una verdadera coacción sobre la conciencia del elector.

Más curioso todavía: el Poder ejecutivo, en el proyecto de ley que estamos discutiendo, solicita la sanción del voto obligatorio, es de suponer que como una resultante del deber en que se encuentran los ciudadanos miembros de una sociedad política, de delegar esta gran parte del poder, imposible de ejercerse colectivamente, y en el mismo proyecto le dice al ciudadano que su voto no vale un voto, que vale una fracción de voto.

Este proyecto ha sido ensayado y abandonado en seguida de ensayarlo, por algunas naciones de Europa y América. En la actualidad, que yo sepa,—y esto no tiene mayor importancia,—existe en la República Oriental, en el Brasil, en Portugal y en España.

¡Y esto, señor presidente, es lo que se nos propone en reemplazo del sistema actual, olvidándose que todos los progresos realizados los hemos alcan-

zado al amparo del escrutinio de lista, hoy tan combatido; olvidándose que por ese régimen ha habido lucha en los comicios; olvidándose que, en virtud de ese sistema, la oposición se ha sentado en este recinto, haciendo diputados, cuyos nombres están en el recuerdo de todos, que supieron mantener á raya la política de antiguos presidentes, trayendo con más frecuencia que hoy á este recinto á los ministros del Poder ejecutivo!

Confesémoslo, señor: lo que se pretende, es obtener de la ley lo que hasta ahora no se ha podido conseguir de la costumbre; lo que se quiere es contemporizar con las oposiciones de algunas provincias, es entregar una ofrenda de paz á un partido que vive eternamente conspirando; lo que nos atrae, es el aplauso inmediato, sin importarnos que él venga de los interesados ó de los independientes, de los titulados independientes, de aquellos que según la sarcástica definición de Fox, son hombres que no sirven y con los cuales no se puede contar para nada. Y como todo esto se ha de cubrir con un ropaje vistoso, como se ha de apelar á la opinión pública, no sé que las credenciales que los acreditaban representantes de ella, les ha de ser más fácil exhibirlas á los partidarios de la lista incompleta, que á los que la impugnamos; como si fuera menester recurrir á la palabra tocante ó á la retórica pomposa, no faltará quien nos diga que si el Poder ejecutivo solicita la reforma, debemos nosotros acordársela.

Para acceder, señor, á ese pedido del Poder ejecutivo y para levantar á la manera como algunos los entienden los prestigios del Congreso, tendremos que olvidarnos de lo que dejo dicho; tendremos que olvidarnos que el escrutinio de lista es el sistema de la Constitución, que quiere que la simple mayoría demostrada en el comicio, traiga su representación á la cámara; tendremos que olvidarnos que el escrutinio de lista es el único sistema que vigoriza la acción y el poder de las provincias; tendremos que olvidarnos de que si tiene sus defectos, todos los demás sistemas también los tienen empezando por el de ser inconstitucionales; y apresurarnos á descalificarlo mostrándolo en forma tal, que un extraño no creería que

la cámara de diputados se renueva por mitad cada dos años; no creería que los diputados somos hijos de las provincias que nos eligen ó con residencia inmediata en ella; no creería que hay ocho provincias que cada dos años eligen uno, dos, ó á lo sumo, tres diputados; se imaginaría por el contrario, que la Cámara de diputados de la Nación se renueva «in totum» cada cuatro años con ciento veinte diputados, venidos aquí en virtud de una lista de ciento veinte nombres lanzada desde la capital de la República, dispuestos á imponer sin conocimiento de hombres, de cosas ni de localidades la ley en todo el territorio de la Nación.

Y los señores diputados saben que esto no es así.

Y tan no es así, que voy á detenerme un momento trayendo un antecedente interesante, quizás desconocido de los señores diputados y que ha de dejarnos alguna enseñanza.

Era en la ciudad del Paraná, en el año 1856, en la época anterior á la reforma del 60, cuando las constituciones de las provincias debían ser sometidas á la aprobación del honorable Congreso. Se trataba de la constitución de la provincia de San Juan, que en su artículo 7.º establecía que el total de los diputados á su legislatura debía ser elegido por una misma lista.

La comisión de legislación y de negocios constitucionales, después de examinar prolijamente esta Constitución, aconsejaron y consiguieron de la cámara, y esta sanción prevaleció después en el honorable Senado, el rechazo del artículo de la referencia.

El informe escrito de la comisión fué ampliado luego por el doctor Rawson y más tarde por don Lucas González, miembros los dos de esa comisión.

En síntesis, deduzco lo siguiente: primero, que en opinión de aquellos hombres, que tan cerca estaban de los que nos dieron la Constitución, los diputados al Congreso se elegían directamente y á pluralidad; y segundo, que ellos querían que así como para las elecciones nacionales las provincias se consideraban distritos de un solo estado, para las elecciones locales se dividieran en circuitos, determinados en razón á su población, á su importancia y á su capacidad electoral.

Con este motivo produjo un debate promovido por el diputado don Manuel Lucero, abogado de Córdoba y después rector de su universidad, no precisamente alrededor del artículo 7.º, sino en cuanto sostenía su creencia de que el Congreso debía aprobar toda elección provincial, siempre que no estuviera en oposición con la forma representativa, republicana federal, adoptada por la Constitución.

Como digo, se produjo un extenso debate en que se impugnó el artículo 7.º de la Constitución de San Juan y se defendió, si bien en forma indirecta, ya que no estaba en la discusión, la elección local por distrito; y se adujeron entonces, con la precisión, con la sencillez, con la claridad que tanto distinguía á los hombres descolantes de la confederación, más ó menos los mismos argumentos que después se hicieron valer en favor de la circunscripción en los grandes debates de los años 90, 902, y 905, y por la oportunidad en que algunos de esos argumentos fueron hechos, vienen á confirmarme en mi creencia de que el sistema de la circunscripción sostenido por tantos señores diputados ahora, tiene marcada semejanza con el sistema de distrito, sostenido por la Constitución. Y de tal manera trabajan en mi espíritu esos argumentos, especialmente el argumento de la localización electoral, que yo le daría mi voto, si no fuera su inconstitucionalidad, inconstitucionalidad reconocida ya por el honorable Congreso nacional en distintas ocasiones, desde el año 61, en que los diputados al Congreso del Paraná rechazaron los diplomas de los diputados electos por la provincia de Buenos Aires, hasta el año 905, en que la ley de circunscripción fué derogada por la misma razón.

De todos modos, señor presidente, llamado á optar entre el régimen de la circunscripción, que es franco, que es viril, que es republicano, que pone al elector en contacto con el elegido, y el sistema de la lista incompleta, votada en Inglaterra, en la cámara de los lóres, por un sentimiento puramente aristocrático, según la expresión de un publicista argentino, ya que se quería llevar al parlamento á aquellos hombres cuyo carácter y cuyo pensamiento no les permitía obtener ni solicitar las simpatías

del mayor número, obligado á pronunciarme, digo, entre estos dos sistemas, decididamente estoy por el primero.

Entre otros inconvenientes que nos ofrece el sistema auspiciado por el Poder ejecutivo, se encuentra el de ser innocuo, el de ser antidemocrático, el de ser inconstitucional y el de ser peligroso para nuestro federalismo.

La innocuidad no es ciertamente el más grave de sus inconvenientes; pero francamente, permítame que se lo diga el señor ministro del interior, con todo el respeto que le debo: no valía la pena tomar las palabras del Eclesiastes y decirnos con él que cada día tiene su tarea y que la tarea de hoy consiste en darle al país un nuevo sistema electoral, para salir después con la lista incompleta á cuyos efectos escapan, como lo prueba el cuadro de renovaciones que tengo por delante, ocho entre catorce provincias: Entre Ríos, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, que harán su renovación por el «bárbaro» sistema de la lista, como lo llama un diario de la mañana.

Me felicito yo de ello, señor presidente, porque estas provincias harán su renovación del año entrante, por el escrutinio de lista, que al lado de sus ventajas, quizá presente alguno de los muchos inconvenientes que tiene el sistema cuya sanción se aconseja en su reemplazo.

Pero, señor presidente, nosotros no podemos legislar por el simple placer de legislar. Una ley de elecciones nacionales, inspirada en propósitos nacionales, no puede tener tan sólo aplicación en una región determinada: si ella es de adaptación general, debe tener imperio en todo el territorio nacional.

Este sistema, señor presidente, va contra la libertad del ciudadano, cuando caprichosamente le dice que él no puede votar sobre la totalidad de los candidatos de un distrito, como lo requiere la Constitución. Va contra la equidad, cuando antojadizamente le dice á un partido, prescindiendo de su número y de sus fuerzas, que él no puede sacar triunfante la totalidad de los candidatos de una lista. Va contra la igualdad, cuando arbitrariamente toma en consideración una minoría, sin tener en cuenta las demás. Y si va con-

tra la libertad, contra la equidad y contra la igualdad, surge entonces, señores diputados, la conclusión de que va contra los principios que informan la democracia.

A este sistema puede además hacerse la objeción—y cumple á mi lealtad manifestar que esa objeción llega también al escrutinio de lista—de que no responde á la democrática tendencia de dar amplitud de representación á todas las opiniones que dominan en el pueblo.

Tócame ahora probar la afirmación que hago, y esta afirmación la hago sin vacilar y sin salirme de mi obligada modestia: que el sistema auspiciado por el Poder ejecutivo es abiertamente inconstitucional.

Véamoslo.

Cuando la Constitución dice: «á simple pluralidad de sufragios», quiere decir á mayoría de sufragios, sin calificar esa mayoría, y sin importársele tampoco que sea absoluta ó relativa.

A pluralidad de sufragios importa decir, según el diccionario de la Academia, por el mayor número de sufragios, por el mayor número de votos.

Pluralidad—todos nosotros lo sabemos—quiere decir más, el que tenga más con relación á otro que tenga menos.

De suerte entonces que los candidatos que resultan electos en virtud de la lista incompleta, por la primera minoría, habrán resultado electos, no por el mayor número de votos, sino por el menor número de votos, y esto es precisamente lo que la Constitución no consiente.

Cuando ella en sus artículos 37, 38 y 39 establece que los diputados se eligen directamente, cuando dice que cada provincia y la Capital se consideran como distritos electorales de un solo estado y cuando fija el número de diputados que ha de elegir cada distrito, es incontestable señor, que proclama el escrutinio de lista en oposición á cualquier otro.

Robustezco, señor presidente, estas mis opiniones con antecedentes históricos nacionales anteriores al año 53, que no son del caso mencionar; con decisiones de legislaturas anteriores á la nuestra, y con las opiniones de Magnasco, de Lucero, de García Merou, de Vicien-

te Gallo, y alguna otra autoridad respetable, entre las que contestaron á la encuesta de «La Nación», cuyo nombre se me escapa en este momento.

La robustez asimismo, con el artículo 81 de la Constitución, que establece que la elección de electores de presidente y vice presidente de la Nación se hará en la misma forma prescripta, para la elección de diputados, queriendo significar con esto que las constituyentes entendieron dejar así establecido un sistema electoral, cuando dijeron, en artículos anteriores, que los diputados se elegían directamente por distrito y á pluralidad de sufragios.

Y en lo concerniente á la interpretación que debemos darle á la palabra pluralidad, pongo finalmente mi opinión bajo la protección de la de Sarmiento, manifestada en un discurso pronunciado en el honorable Senado de la Nación, cuyos párrafos pertinentes me veo impedido de leer á la honorable cámara, por haber tenido la mala suerte de perderlos.

Tan peligroso es, señor, para nuestro federalismo el sistema que discutimos, que debemos convenir que si no salimos de la pendiente en que nos coloca la obsesión de dar solución á problemas nacionales que nuestra población electoral, tan escasa, nos dice que no son ciertamente impostergables, estamos en trance de hacerlo desaparecer. Llevados por nuestra tendencia centralizadora, hemos sancionado, por razones que no disiento y que seguramente son las que apuntaba el señor diputado Fonrouge, la ley de impuestos internos, la ley de conscripción, la ley de policía sanitaria animal, la ley de defensa agrícola, la que entrega al Consejo nacional de educación las escuelas primarias de las provincias y cien otras de constitucionalidad dudosa.

Y como si esto no bastara, vamos á suplantarlo ahora con un sistema contra el cual protesta el artículo 37 de la Constitución, el escrutinio de lista, que mantiene dentro de nuestro federalismo vigorosas unidades autónomas, para traer minorías que en vez de aunar sus esfuerzos á los de la mayoría en bien de la provincia, se habrían de dedicar—la experiencia no habría de tardar en demostrarlo—trabajadas por el deseo de reemplazarlas, á socavar día por día, y hora por hora, y acto por acto, la auto-

ridad de los gobernadores de provincia, halagadas por el deseo de reemplazarlos, fracasados éstos, debido á la crisis permanente á que estarían sujetos.

Complaceremos, es cierto, al señor presidente de la República; lo pondremos en condiciones de poder hacer, conforme á su programa, gratas declaraciones á las minorías opositoras; pero tendremos, en cambio, gobiernos de provincia débiles é impotentes, y por lo tanto imposibilitados para poder imponerse en sociedades que viven continuamente divididas y profundamente anarquizadas. (*¡Muy bien!*)

Permítaseme agregar algunas consideraciones más.

Si como diputado no puedo darle mi voto á un sistema que constitucional, doctrinaria y políticamente es inaceptable, como miembro del partido conservador de la provincia de Buenos Aires tampoco puedo consentir que en forma arbitraria, caprichosa, antojadiza, se venga á cercenarle una tercera parte de la representación que legítimamente le corresponde ante el Congreso.

Y si se me hace la objeción de que estoy respirando por la herida, como vulgarmente se dice, contesto dejando constancia de un hecho reconocido, si no por todos, puesto que he oído con sorpresa al señor diputado por la provincia doctor Fonrouge manifestarse en desacuerdo con la opinión que voy á emitir, reconocido por la gran mayoría, y entre otros por el señor ministro del interior—que no se ha referido al partido conservador, sino á todo aquel que estuviera en el mismo caso—el partido conservador puede desdoblarse, puede dividirse y sacar triunfantes las dos listas que se autoricen.

Es inmoral, decía el señor diputado Fonrouge...

Sr. Fonrouge—No es leal, he dicho.

Sr. Avellaneda—No es leal.

Sr. Fonrouge—El propósito de la ley, precisamente, es respetar el derecho á favor de la minoría.

Sr. Avellaneda—Mucho menos leal sería que un partido irrisorio trajera al Congreso la representación que no le corresponde, dado el escaso número de sus votantes! (*¡Muy bien!*)

Sr. Fonrouge—Pero eso resultará de la elección.

Sr. Avellaneda—Lo que resulta es que esta es una nueva falla que hay que reconocer en el sistema de la lista incompleta; lo que resulta es que ante la posibilidad, más, que ante la probabilidad, más que ante la seguridad, de que han de resultar burlados los propósitos del legislador, no puede ni afirmarse, ni confirmarse, ni probarse, ni comprobarse, ni recomendarse ciertamente las bondades del sistema que se auspicia! (*¡Muy bien!*)

¿Qué es lo que busca, señor presidente, con la sanción del sistema que se auspicia? ¿Traer un control á la mayoría del Congreso? ¿Estimular á los partidos para que concurren á la lucha?

El control lo tenemos ya con el sistema actual; lo tenemos en este momento dentro de la cámara. El control nace de la falta de solidaridad política que pueda haber entre los diputados de Buenos Aires y de la Capital con los diputados de Salta y de Jujuy. El control nace de la falta de vinculación que pueda existir entre los diputados del litoral y los diputados de Cuyo; la representación de una provincia puede ser partidaria y la representación de una provincia vecina puede ser adversa á la política que desenvuelve el Poder ejecutivo nacional. Los intereses económicos, agrícolas, comerciales, industriales, no son uniformes en todo el territorio de la República; de modo, entonces, que para el dictado de la legislación general vendrá el cambio de opiniones, la discusión, la contradicción, la controversia que debe preceder á la solución de todas las grandes cuestiones nacionales.

Se estimula á los partidos para la lucha, dándoles padrones irreprochables, como lo hemos hecho, organizando el comicio, garantiendo la eficacia del voto, imponiendo una penalidad adecuada, sin que venga después, con la aquiescencia del Poder ejecutivo, las mal llamadas leyes de amnistía; pero no dándoles representación á las minorías, precisamente en este país, en que las revoluciones habidas se han justificado ó han pretendido justificarse, no en la falta de representación de las minorías, sino en la coacción, en el fraude, en la fuerza ó en la violencia, que les impedía á ellos, los opositores, ejercer

el gobierno en toda su plenitud, ya que se creían los más y no los menos.

Oigo hablar, señor presidente, de la necesidad imperiosa en que estamos de dar representación á todos los partidos.

Desde luego, me atrevo á sostener que esta no es una necesidad constitucional, ni una necesidad social, ni una necesidad de vida, por decirlo así; porque en nuestro país, dados nuestros intereses, nuestra manera de ser, nuestras propias conveniencias, sean locales ó nacionales, no existen, no tienen para qué existir los partidos antagónicos. Los únicos partidos que yo conozco, son aquellos con programa tan amplio, que en sus filas tienen cabida todas las aspiraciones y todas las tendencias, ó aquellos partidos transitorios, que se forman con fines pasajeros, partidos á los que aludía el señor diputado Fonrouge, y que no tenemos para qué anhelar.

Abordando, entonces, la cuestión bajo este aspecto, yo arriesgo una opinión, que podrá ser equivocada, pero que es sincera: sancionando el sistema del Poder ejecutivo, violentaremos la Constitución sin ningún resultado práctico; estas minorías forjadas por un mecanismo artificial, cuando lleguen á la honorable cámara, no serán garantía de mayor acierto en sus deliberaciones; si no se dedicaran, como le dije antes, á entorpecer, á perturbar, á dificultar la acción de los gobiernos de provincia, lo que sería, vuelvo á repetirlo, perjudicial y grave para ellas, no habrían de tardar en incorporarse á la mayoría, sea porque procediendo honradamente aquí adentro, se convencieran de la veracidad de las palabras de Renan, cuando dice que es muy difícil el gobierno de las cosas humanas y que es menester ser indulgente con los que no se desempeñan del todo mal; sea porque el parlamentarismo, como alguien lo ha dicho, á la misma manera que la lira de Orfeo, amansa á las fieras con su música.

Excluyo de estas ligeras apreciaciones sobre partidos y los que habían de ser sus representantes, al partido socialista, también excluido en sus apreciaciones por el diputado Fonrouge, que desea la representación proporcional, y del que fué un digno exponente en esta cámara el señor diputado Palacios, cuyo

camino á reconstruir, para volver á este recinto, no es más corto por la lista incompleta que por el sistema actual.

Sr. Fonrouge—Pero el señor diputado sabe que el diputado Palacios no vino por la acción exclusiva de los socialistas.

Sr. Avellaneda—Yo no lo sé...

Sr. Fonrouge—¡No! Es bueno que los hechos históricos se recuerden bien.

Sr. Avellaneda—No tengo por qué saberlo.

Sr. Fonrouge—Si el señor diputado quiere sacar consecuencias de los hechos, es justo que los cite como fueron.

Sr. Avellaneda—No saco consecuencias, sino que hago una afirmación: por la lista incompleta, los representantes del partido socialista están tan lejos de esta cámara como por el sistema actual. Esto es evidente.

Sr. Varela—El caso del diputado Palacios, es una prueba de la bondad del sistema de la circunscripción.

Sr. Avellaneda—No creo que las leyes electorales, á las que algunos consideran como prolongación de la Constitución, puedan ser calificadas de leyes transitorias, como simples leyes de ensayo; dentro, entonces, del concepto de que las leyes electorales son leyes fundamentales, no creo que puedan tener aplicación el principio de la rotación proclamada por alguien, cuando dice que el mejor sistema electoral es el más nuevo, ni que deba tomarse ejemplo de la Suiza que, según Emond Villey, en un reducido número de años ha dado cuatro ó cinco leyes electorales.

Nosotros, señor presidente, tenemos mucho por hacer, mucho por organizar, por reglamentar, para que la cuestión electoral pueda ser la constante preocupación de los poderes públicos.

Si cada día tiene su tarea, como lo dice el Poder ejecutivo en su mensaje que sea la de hoy fomentar nuestras riquezas naturales, acrecentar la inmigración, dilatar el área de tierra cultivada, repartir inteligentemente la población, el capital y la cultura en todo el territorio; si cada día tiene su tarea, entreguémosle la de hoy á los ministerios de instrucción pública, de agricultura y de obras públicas; dediquémonos á contar febrilmente, como lo quería un estadista argentino, los kilómetros de nuestras

vías férreas, el número de escuelas que se abren, los millares de hombres que arriban á nuestros puertos; y más tarde, cuando tengamos un cuerpo electoral digno de ser considerado, cuando el pueblo, rompiendo el marasmo cívico en que vive, salga á la calle y ocupe en el comité, la plaza y el comicio el puesto que le corresponde, reformemos la Constitución y pensemos recién entonces en dar representación proporcional á todas las opiniones.

¡Pero para qué seguir adelante, si el cóndor cuyo vuelo magestuoso divisábamos hasta ha poco en las alturas ha tendido ya las alas para dejarse caer con precisión sobre su presa? Me circunscribo, pues, á fin de salvar mi situación de miembro de la comisión de negocios constitucionales, á decir que estoy por el rechazo del voto limitado, que como el voto acumulativo, que estuvo antes en la mente del Poder ejecutivo, el uno dando al ciudadano menos y el otro dándole más de un voto, son meros arbitrios que repugnan, lo mismo y por igual, tanto al espíritu de la democracia como á los términos expresos de nuestra Constitución.

He terminado.

(En las bancas ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos y felicitaciones al orador.)

Sr. Varela—Pido la palabra.

Las circunstancias especiales que han rodeado el estudio de este asunto en la comisión de negocios constitucionales, me obligan á ocupar por breve tiempo la atención de la cámara, tanto para explicar la actitud de algunos miembros de ella como para proponer lo que el diputado Calvo y el que habla conceptúan más conveniente por el momento para substituir el sistema de la lista incompleta que se nos propone.

No es extraña, señor presidente, esta situación de la comisión. Cada uno de sus miembros ha sostenido sus ideas, sin que en ningún momento hayan intervenido en sus deliberaciones ni intereses de partido ni influencias políticas de ninguna especie que pudieran haber hecho vacilar la independencia de las opiniones individuales.

No ha habido tampoco el propósito de obstrucción; si nos ha dividido un solo punto, la idea de lo mejor nos ha unido, desde el primer momento: el pro-

pósito común de facilitar al Poder ejecutivo la noble y patriótica tarea en que parecía empeñado.

Es así como han sido estudiadas y despachadas las leyes del enrolamiento, del padrón, del voto obligatorio, del voto secreto;—del voto secreto para combatir la venalidad y la presión—y el voto obligatorio, repudiado en muchas partes, pero indispensable entre nosotros, para hacer concurrir á esa masa enorme de la gente acomodada de nuestro país, que acude á los mítins de protesta, pero que nunca acude á las urnas y que ha recibido del esfuerzo colectivo el acrecentamiento de su fortuna, pero que nunca ha concurrido al esfuerzo colectivo para mejorar las instituciones.

En cuanto al sistema electoral de la representación, es el que más nos ha dividido. Ello no es extraño, no es nada más que un reflejo de la opinión general. En esa encuesta á que se ha referido el señor diputado Avellaneda, de «La Nación», numerosos intelectuales no ajenos á esta clase de estudios han dado sus opiniones sin que podamos hallar dos concordantes sobre lo que conviene á nuestra actualidad política. Y si recorremos lo que pasa en el mundo entero, podemos ver que en Francia se deroga con gritos de protesta el sistema de las circunscripciones para volver al sistema de lista, al que le colgamos nosotros todos nuestros pecados; en Bélgica se deroga el sistema del voto obligatorio, porque se le considera deprimente en un pueblo de civilización avanzada, y en Suiza, país que es ejemplo de civismo y verdad republicana, lo he sabido de mi distinguido colega, por muchos conceptos apreciable, doctor Montes de Oca, se trata de cambiar el sistema actual, siguiendo la tradición, de que cada dos años se le viene cambiando de una manera fundamental sin acertar con lo científico ó lo que satisfaga las aspiraciones generales.

Esta situación, señor presidente, hace pensar que es muy difícil encontrar la ley que encaje en las modalidades y en el ambiente del pueblo que ha de cumplirla, ó que el mejor sistema es el que se cambia siempre; y quizá habría que preguntarse si no estaba fracasado el sistema democrático!

No soy tan pesimista; creo que la de-

mocracia argentina se afianza con leyes como ésta, de alta moralidad, si se mantiene el buen padrón, la libertad del sufragio, la verdad del escrutinio; si se aplican las penalidades como en los delitos comunes, si se hace del voto una función pública y si se concluye para siempre con las tolerancias y con las amnistías, que hacen fracasar, en esta materia, todas las iniciativas de progreso.

Pero, además de estas obligaciones y garantías, hay que crear y fomentar el votante espontáneo, con el incentivo de que la acción de todo ciudadano no es cosa perdida en la vida pública; y para eso no hay más que abrir la ley á todas las ambiciones legítimas; hay que estimular el entusiasmo en la masa votante.

Yo he creído, señor presidente, y lo he comprobado con la experiencia, que el sistema de la elección uninominal fuera el más indicado para nuestra actualidad política; y ese sistema, practicado en 1904 para la renovación bienal de la cámara, nos hizo ver que fuerzas inertes hasta entonces entraban en acción, haciéndonos presenciar un espectáculo de reacción cívica que nos hizo recordar nuestras más apasionadas luchas republicanas, llevándonos á entrever para el futuro el reinado del sufragio libre.

Ahí está, entonces, el medio transitorio, que es lo que ahora se necesitaría para llegar á las soluciones que la ciencia aconseja, para llegar más tarde al sistema de la representación proporcional ó del que se halle más adelantado, cuando la verdad del comicio con sus estímulos vaya arraigando el amor á la lucha y bajo ese ambiente se formen los verdaderos partidos con derecho á tener sus fuerzas siempre representadas.

Observé, desde el principio, en la comisión, que no se debía aceptar esta reforma propiciada por el Poder ejecutivo; que la comisión debía despachar el proyecto tal cual lo despachó, esperando que presentara á la cámara un proyecto de convención que sancionara la derogación de ese artículo 37 de la Constitución, círculo de hierro dentro del cual no cabe ni una minoría. Pero no habiendo encontrado ambiente en la comisión, no me he creído con elementos para venir con ellos al seno de la cámara. Entonces, he desistido de sostener esta tesis tan en la verdad, para contri-

buir á mi vez á la solución inmediata, que creo más apropiada á las expectativas y á los anhelos que se han formulado alrededor de esta cuestión de palpitante actualidad.

El presidente de la comisión de negocios constitucionales nos dijo en uno de sus párrafos, que la filosofía política moderna exige la representación de las minorías.

Esto no puede combatirse en teoría; pero sí puede objetarse la oportunidad de aplicarlo en un momento en un país cuando no se conoce cuáles son los partidos de la mayoría ni de la minoría.

Nuestros viejos partidos están disueltos; disueltos, ya por el enervamiento que producen las abstenciones prolongadas y por el desbande de las evoluciones, y no se podrán calificar de partidos políticos los bandos que puedan formarse para concurrir á la conquista de unas bancas, que esta combinación feliz de la lista incompleta les ofrece como en bandeja, como caídas del cielo. Pero nuestra Constitución no ha querido que estén representadas las minorías. El precepto es terminante: por simple pluralidad de sufragios, quiere decir que son las mayorías las que eligen los representantes del pueblo de la República. Las minorías no podrán llegar mientras el artículo 37 así lo determine. La Constitución está escrita en un estilo muy claro para que todos podamos entenderla. Yo la entiendo así. Los maestros del derecho, como ya lo ha anticipado el presidente de la comisión, nos harán con erudición y elocuencia interpretaciones contrarias, pero respetando los altos propósitos y las buenas intenciones que pueden guiarnos, no han de ser sino argucias para poder saltar sobre disposiciones concluyentes.

Dentro de estas ideas, no veo nada que llene las aspiraciones del momento actual, como la elección uninominal por circunscripciones, tal como se efectuó en los comicios de 1904. Este sistema no es el sistema de las minorías, aunque puedan llegar esos partidos por su mecanismo; todos los diputados vienen elegidos por mayorías á simple pluralidad de sufragios.

Se han citado también en esta sesión los dos argumentos ya conocidos y muy repetidos: el de disolver los partidos y

el de subalternizar las cámaras, trayendo á su seno prestigios lugareños que harán cambiar el amplio criterio del diputado del pueblo de la Nación, por el del representante de los intereses de la parroquia.

Qué error, es todo esto, señor presidente no puede disolverse lo que no existe. Hoy no existen partidos entre nosotros y yo no veo cuál es la necesidad de que se busquen con tanto afán partidos sin programas, desde que no se ha sentido la necesidad de llenar ese vacío en el desenvolvimiento de la Nación.

El Brasil, que tiene la lista incompleta, que se dice que fomenta los partidos, hace mucho tiempo que se maneja sin ellos, y al decir de un publicista de aquel país, no es extraña á la influencia de esa situación el desarrollo de sus últimos progresos.

Los partidos políticos argentinos se han formado alrededor del prestigio personal de hombres eminentes, que los han fomentado y dirigido con sus ideas personales, casi siempre inspiradas en el bien general.

Pero creo contrariamente á lo sostenido aquí, que ha llegado el momento de que se formen partidos de principios, de ideales, que el sistema de circunscripción pueda llegar á vigorizar. ¿No es lógico que estén representados en el Congreso todos los factores que forman la riqueza general y el organismo social? ¿No es lógico que tengan su representación, por esa causa, el comercio, la alta banca, las universidades, los socialistas, los radicales, los grandes intereses agrícolas y ganaderos, las industrias y el trabajo? ¿No es mejor que vengán al Congreso esas tendencias políticas antes que minorías sin tendencias? ¿Qué nos van á traer los partidos de formación ocasional que se disuelven después de la lucha?

Con respecto á la oposición de las provincias, que nos ha dicho el presidente de la comisión que están ahogadas, se puede decir que hay dos clases de oposición: una, compuesta de los hombres desalojados hoy del gobierno, por los amigos de ayer. ¿Esas son las minorías que van á venir al Congreso á contralorar la administración de la cosa pública? ¿Pero no van á contralorar na-

da, porque inmediatamente de que se sienten en estas bancas esos opositores se hacen todos gubernistas en el orden nacional. (Risas.)

Hay otras provincias en que la oposición tiene sus zonas de influencia, en razón de su situación geográfica. Estos son los representantes natos de la circunscripción que yo voy á votar, que no vendrán de ninguna manera por la lista incompleta que es cerrada, pues que los dueños de situaciones no los dejarán venir, cuando éstos son poco escrupulosos, mediante el desdoblamiento de los elementos oficiales.

El temor de que por el sistema de circunscripción pueda formarse una cámara compuesta de elementos subalternos es también ilusorio. Los hechos demuestran que ha pasado para el país la época en que podría venirse á la cámara un caudillo audaz y analfabeto. Si existe ese caudillo, es simplemente como auxiliar del hombre culto, á quien le junta votos, sin que pueda disponer de ellos.

También se ha dicho que la experiencia nos ha demostrado el mal resultado que nos ha dado la circunscripción, y como argumento único me permitiría recordar á la cámara que en la elección de 1904, la primera que tuvo lugar en la Capital, vinieron á esta cámara como diputados los señores Mariano de Vedia, Eliseo Cantón, Rufino Varela Ortiz, Pedro Luro, Francisco Oliver, Luis Peluffo, es decir, un grupo de ciudadanos de la más distinguida posición social y política, siendo todos sus contendores de la misma distinguida calificación.

¿Y cómo se luchó? El señor diputado Vedia triunfó sobre nuestro apreciable colega el señor diputado Calvo por doce votos apenas; el señor diputado Cantón contra el señor doctor Francisco P. Moreno por doce votos y contra el doctor Miguel Piñeiro Sorondo por 19; el señor Lanusse triunfó sobre el señor Tomás Cullen, también por muy pocos votos y en el Rosario el señor Pelayo Ledesma contra el doctor Lisandro de la Torre. Quiere decir que hubiera sido perfectamente selecta la representación, tanto con los vencidos como lo fué con los vencedores.

Sí, señor presidente; ha pasado el tiempo en que el caudillaje llegue á la

cámara. El ambiente y la cultura nacional rechaza al hombre inferior en el manejo de sus destinos.

Volviendo á aquella elección, si bien el teatro principal fué la Capital, hubo también lucha en Santa Fe y en Salta, y en ese primer ensayo se tuvo la evidencia de que no se necesita el voto obligatorio para combatir el indeferentismo y que basta el contacto del elegido con el elector, hombre superior, que baja á enseñar al pueblo su deber y sus derechos y lo incita á cumplirlos.

La lista actual, que ha defendido con elegancia y elocuencia sin igual nuestro distinguido colega el doctor Avelaneda, fué adoptada por los patriotas que hicieron la Constitución del 53 (no sé si conocían otro sistema). No cabía tampoco otro en aquel momento y en aquel ambiente, pues no había más que una sola aspiración y una sola tendencia política: la organización nacional. La lista completa ha permitido, sin embargo, que todos los principales hombres del país pasen por las cámaras y que se formen bajo su amparo todos nuestros grandes hombres de estado. Creo que ha llenado ya su gran misión, y creemos los que propiciamos el sistema de las circunscripciones que ha llegado el momento de abandonarla, porque empieza á ser asfixiante, dado el cambio de nuestra fisonomía política, económica y social. ¿Por cuál otro sistema, señor? Veamos.

La lista incompleta, que se nos propone por el Poder ejecutivo, se ha tomado de países en donde las opiniones están divididas en dos grandes partidos: generalmente uno del gobierno y otro de la oposición. Y entonces es lógico el reparto de la representación en la proporción de sus fuerzas mantenidas constantemente. Pero no es adaptable á países de partidos ocasionales como el nuestro, ni tampoco á los partidos muy respetables, con ideales y con principios, pero que todavía no han podido tener el desarrollo suficiente para constituir entidades de importancia.

El sistema de la lista incompleta es arbitrario, porque no llena las aspiraciones del momento actual, en que se habla de proporcionalidades; es excluyente de una segunda minoría, por respetable que sea; se presta más que ningún otro sistema á ser burlado en su mecanismo in-

consciente y es, á mi pobre entender, el más violatorio de nuestra carta fundamental.

No es una ley de carácter general, puesto que no reparte con equidad sus beneficios á las provincias de representación reducida.

Los partidos cuya formación fomenta—si es verdad que los fomenta—son partidos de minorías, lo que no es un programa muy avanzado.

Como lo ha dicho el doctor Avellaneda, es de corte aristocrático; la circunscripción, es de corte democrático.

La lista incompleta es centralizadora, la circunscripción es todo lo contrario y con su acción descentralizadora desarticula los elementos oficiales y concluye para siempre con el poder decisivo del que tiene todos los resortes en la mano.

No voy á extenderme en más consideraciones para demostrar que la circunscripción es, por hoy, la que satisface más los propósitos que se persiguen.

Sé que otros diputados han de tratar el asunto; preveo un debate tan luminoso como aquel de 1902, y no creo que mi contribución ha de agregar mucho á esta verdadera fuente de estudio en materia electoral.

Permítaseme, señor, antes de concluir, manifestar con toda lealtad que yo creo que la ley, en la forma que la ha despachado la comisión, sea que se complemente con la lista incompleta, con la lista actual ó con el sistema uninominal, será un gran paso dado adelante.

Le oí decir también al doctor Avellaneda que las leyes no pueden hacer lo que no hacen las costumbres. Creo lo contrario; creo que en nuestro país las costumbres las harán las leyes como ésta, por su acción educadora. Las buenas leyes que tienden á levantar el nivel moral colectivo, concluyen, en su práctica, por encauzar en las buenas corrientes todas las energías y todos los instintos.

Nuestro país es demasiado nuevo, y por eso nos parece, cuando lo contemplamos en sus progresos materiales, que va tan ligero, que en cuanto á cultura y á educación cívica nos hemos quedado

parados. Pero no es así, señor. Todo avanza, todo sigue su evolución lógica y lenta hacia el perfeccionamiento. El alma de nuestro pueblo, el alma nacional, es de fácil modelación; no tiene atavismos irreductibles; y cultivada como la tierra en que ha nacido, ha de dar, como la tierra, frutos generosos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Yo había pensado, también, que con respecto á leyes educadoras hubiera sido preferible abordar primero el estudio y la sanción de leyes económicas y sociales, que está reclamando con urgencia la vida de las sociedades modernas. Pero, el señor presidente de la República, que parece que ha querido empezar á hacer prácticas las bellas promesas de su programa de gobierno, ha hecho precipitar su estudio enviando á la cámara los proyectos de reforma. La opinión pública ha aplaudido esta iniciativa, y la comisión, bajo este ambiente, ha creído llenar un deber secundando tan patrióticos propósitos.

Larga ha sido la tarea, señor presidente; pero ha sido fácil porque á todos nos ha unido un mismo y buen propósito y hemos tenido desde el principio, y en todo momento, la ayuda eficaz y el concurso del ministro del interior, señor de claro criterio y de elevadas intenciones.

Al terminar, señor presidente, y en nuestro carácter de miembros de la comisión de negocios constitucionales, á nombre del diputado Calvo y en el mío conjuntamente, presentamos á la cámara nuestro proyecto de circunscripciones, en substitución del propuesto por el Poder ejecutivo, y que no es sino, con algunas ligeras variantes para adaptarlo á la actualidad, el de la ley derogada en 1905.

He dicho. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Numerosos diputados felicitan al orador.*)

Sr. Meyer Pellegrini—Podríamos pasar á cuarto intermedio.

Sr. Presidente—Invito á la cámara á pasar á cuarto intermedio.

—Así se hace, siendo las 7 y 10 p. m.